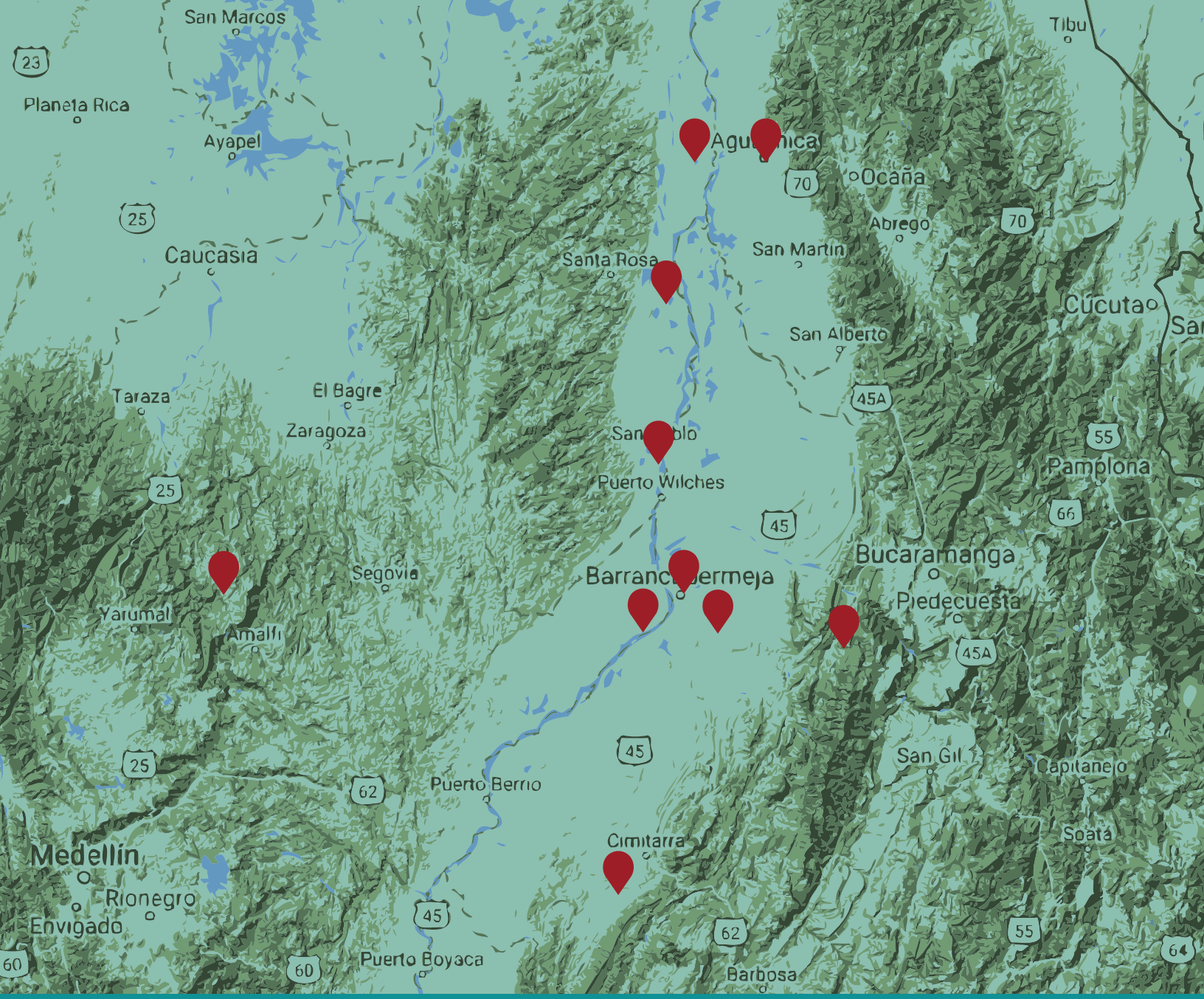


El Magdalena Medio, bajo la mirada periodística:
Propuestas para cicatrizar las heridas

VerdadAbierta.com

VERDADABIERTA.COM

FIP
FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

cooperación alemana
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implementado por
giz

El Magdalena Medio, bajo la mirada periodística:
Propuestas para cicatrizar las heridas

VERDADABIERTA.COM

FIP
FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

cooperación alemana
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implementado por
giz

Fundación Ideas para la Paz -FIP
María Victoria Llorente
Directora

VerdadAbierta.com
Juan Diego Restrepo E.
Director/Editor

Ivonne Marcela Rodríguez González
Coordinadora del Laboratorio Periodístico del Magdalena Medio

Periodistas invitados:
Anaís Vanessa Castrillón Cano
José Adolfo Bernal
María del Carmen Morales
Benjamín Pelayo
Leidy Benavides
Gabriel Martínez
Leonardo Amaya
Blanca Isabel Herrera
Iván Antonio Liévano
Deimer Campuzano
César Solarte

Fotografías:
Archivo Semana
Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio

Diseño y diagramación:
Bibiana Moreno Acuña
https://bibianadisenio.wordpress.com/

Impresión:
Zetta Comunicadores S.A.

2016

Las opiniones expresadas en este documento reflejan las de sus autores y no son responsabilidad de GIZ.

CONTENIDO

Introducción
4

No avanza 'piloto' de reparación colectiva de la ATCC
6

Los destinos cruzados del conflicto urbano en Barranca
10

La drogadicción, un reto en los acuerdos de La Habana
15

Anorí quiere sanar de raíz sus heridas de guerra
21

Paz bajo techo esperan los desplazados de Yondó
26

El sabor amargo del conflicto en San Vicente de Chucurí
30

Simití, una comunidad que lucha por sellar sus 'fracturas'
35

En San Pablo, la esperanza está en los lápices
41

Morales y Arenal:
La larga espera para impulsar el campo
46

Cuando las oportunidades Se 'esfuman' en el puerto petrolero
50

Introducción

>>> Casi que desde el inicio de las conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC para buscarle una salida negociada a la confrontación armada de ese grupo insurgente contra el Estado por 52 años, un 18 de octubre de 2012 en Oslo, Noruega, se comenzó a hacer alusión a un concepto que, en su momento, pocos entendían, se trataba de "paz territorial", que no era otra cosa que bajar hasta las comunidades lo que se acordara entre las partes para superar las condiciones sociales, económicas y políticas que generaron el alzamiento en armas de esa organización subversiva.

En principio no fue fácil asimilar ese concepto y mucho menos traducirlo y convertirlo en artículos periodísticos que dieran cuenta de cómo se aplicaría en las regiones, sobre todo en aquellas más golpeadas por la guerra y en las que se expresan grandes falencias en el desarrollo que afectan a millones de colombianos.

Buscando alternativas para ofrecerle a nuestros lectores elementos de análisis a partir de hechos reales y concretos, más cerca del ciudadano del común, surgió el Primer Laboratorio de Investigación Periodística para la Construcción de Paz en el Magdalena Medio, una iniciativa de VerdadAbierta.com con la financiación del Fondo de Innovación de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ que, durante un año, realizó talleres de formación y producción periodística con colegas de la región, pertenecientes a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y Santander.

El proceso de aprendizaje se adelantó con once periodistas, bajo la asesoría de la periodista Ivonne Rodríguez, quienes entablaron un diálogo sobre los contenidos que debían nutrir de manera práctica ese concepto de "paz territorial", partiendo de las necesidades de las comunidades. Fue así como, poco a poco, fueron brotando algunas de las realidades de Landázuri, San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja, en Santander; Anorí y Yondó, en Antioquia; Aguachica, Cesar; y Simití, San Pablo, Morales y Arenal, en Bolívar. Allí, periodistas comunitarios mostraron las necesidades de las comunidades, pero también cómo ya están impulsando propuestas para reconstruir sus territorios afectados por el conflicto armado.

Con la sensibilidad necesaria para adelantar este tipo experiencias periodísticas, los periodistas, junto con su asesora, le dieron voz a un sinnúmero de líderes sociales, trabajadores comunitarios, campesinos, jóvenes, mujeres y ancianos, que conformaron una gran polifonía a través de la cual se relataron las vivencias de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), que este año conmemoró sus 28 años de existencia en medio de enormes tensiones relacionadas con el conflicto armado y el incumplimiento del Estado.

Este laboratorio también se nutrió de los testimonios de las víctimas de la guerra en Barrancabermeja alrededor de escenarios simbólicos como el Parque Camilo Torres; de los problemas de los jóvenes en el municipio de Aguachica, Cesar, involucrados en el consumo de drogas ilícitas y cómo este fenómeno se ha convertido en un problema de salud pública; de las expectativas de los pobladores de Anorí, Antioquia, que buscan sanar las heridas que les dejó el conflicto armado; y de lo que significa para la llamada "paz territorial" tener un techo digno, como lo reclaman los cientos de desplazados que viven en Yondó, Antioquia.

Uno de los resultados más valiosos de este proceso fue el de la coproducción periodística, que implicó un diálogo constante con el fin de lograr unos artículos en los que la rigurosidad, los hechos ciertos, la precisión y la pluralidad de fuentes testimoniales se destacaran, y así fue. Los comunicadores se aplicaron a sus tareas con responsabilidad y lograron mostrar aquello que se convirtió en nuestro eje central: las múltiples caras a las que se tendría que enfrentar aquellos que llegaran a hablar de la llamada "paz territorial".

Ya han comenzado a correr los tiempos de la implementación de los acuerdos alcanzados tras cuatro años de negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Todos los municipios abordados en este laboratorio están tocados por esa guerra y en ellos sus pobladores esperan que una vez se silencien los fusiles, el esquivo desarrollo llegue a sus puertas y comience una nueva vida y se superen, poco a poco, las condiciones que generaron la confrontación armada.

Esta compilación de historias periodísticas es un punto de partida para pensar en nuestro futuro como país. Las labores que se vienen para las regiones como el Magdalena Medio no serán fáciles, pero como lo percibimos en estos artículos, muchas comunidades ya empezaron, aún antes de los acuerdos, la tarea de consolidar la paz entre sus pobladores. Se trata entonces de seguirlos apoyando, para que sus ejemplos continúen marcando la senda de una vida próspera, justa e incluyente.

Agradecemos profundamente a quienes hicieron parte de este Primer Laboratorio de Investigación Periodística para la Construcción de Paz en el Magdalena Medio, a los periodistas que con tanto compromiso y seriedad asumieron el reto propuesto por *VerdadAbierta.com* y GIZ; y a nuestros aliados, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), cuyo apoyo incondicional resultó vital para concluir con satisfacción este proyecto, y a Revista SEMANA, que a través de su portal *Semana.com* contribuyó a difundir estas historias.

Equipo VerdadAbierta.com

Bogotá, 25 de noviembre de 2016

No avanza 'piloto' de reparación colectiva de la ATCC

Se formuló hace ya diez años, fue seleccionado por el gobierno nacional para arrancar con su implementación y son pocos los logros alcanzados. La impaciencia embarga a los labriegos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare.

ESCRITO POR **ANAÍS VANESSA CASTRILLÓN CANO* Y VERDADABIERTA.COM**

>>> Ha pasado casi una década desde que se formuló el Plan de Reparación Colectiva de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) y hasta el momento no hay avances significativos en su ejecución. A los labriegos les ha tocado armarse de paciencia para esperar que el Estado cumpla.

Propuestas fundamentales en temas políticos, ambientales, sociales y productivos se están quedando en el papel porque hasta el momento son pocas las acciones que se han concretado. En esa apreciación coinciden Luis Fernando Serna y Rebeca Cano, quienes hace diez años participaron de la formulación de ese plan.

Si bien en 2006, los campesinos hicieron los primeros acercamientos con el Estado para exponerle su plan, construido sobre la base de la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, solo fue dos años después que el gobierno nacional mostró interés en realizar un primer diagnóstico de los daños que causó el conflicto armado a esta comunidad, incrustada en la región del Magdalena Medio.

La iniciativa de esta asociación recibió un respiro tras ser seleccionada por el gobierno nacional para realizar un proyecto piloto, junto con seis propuestas más, sobre reparación colectiva, siguiendo los lineamientos de la Ley 1448 de 2011, que entró en vigencia el 1 de enero de 2012 y a través de la cual se creó la Unidad Nacional de Víctimas, cuya misión es reparar a las víctimas del conflicto armado.

La ATCC entonces fue integrada a las iniciativas de El Tigre y El Placer, en Putumayo; la Universidad de Córdoba, en Montería; La Gabarra, en Norte de Santander; La Libertad, en Sucre, y El Salado, en la región de los Montes de María.

Serna explica que hay mucha expectativa con los proyectos formulados porque esperan que a través de su ejecución se supere la condición de pobreza que padece la comunidad. "Cuando el Gobierno nos dijo que cómo querían que nos repararan, las expectativas fueron muy grandes", reitera.

Sin embargo, los únicos avances que existen se deben, según Cano, al impulso que le ha dado la comunidad. Lo que falta, dice, es el compromiso del Estado, pero con respeto. "Para nadie es un secreto que las instituciones quieren imponer sus planes o sus diseños, y la principal exigencia que hemos hecho es que respeten nuestra autonomía", agrega la líder de ATCC.

Ejemplo de resistencia

La ATCC nació el 14 de mayo de 1987 en el corregimiento La India, en Landázuri, Santander, y tiene influencia en cinco municipios más: Cimitarra, Bolívar, El Peñón, Sucre y La Belleza. En total, son 36 veredas en tierras colindantes al río Carare. Según los datos de la organización, a la fecha cuentan con 480 socios y sus objetivos están enfocados en la resistencia civil, la promoción de la convivencia pacífica, el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento organizacional y funcional en un territorio de 94 mil hectáreas.

Como lo documenta el libro *El orden desarmado*, del Centro Nacional de Memoria Histórica, esta asociación es un ejemplo de resistencia. Padeció los ataques de grupos guerrilleros y paramilitares, que ocasionaron asesinatos y desplazamientos, buscando

*Periodista comunitaria de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Atcc), aspirante al título de Psicóloga.

destruir la médula de la comunidad: su organización social. De los 7 mil habitantes que estimaban componían su territorio, 3 mil 600 lograron aguantar los embates en sus veredas; el resto se desplazó a otras regiones del país.

Sus pobladores llevan a cuestas la guerra desde la década del setenta, cuando llegó la guerrilla de las Farc a esa región, no solo imponiéndose con sus armas, sino con sus actividades políticas a través del movimiento conocido como Unión Nacional de Oposición (UNO).

Luego sus padecimientos empeoraron una década después cuando el Ejército desarrolló en aquella región una fuerte represión contrainsurgente ejecutando acciones como la carnetización de sus habitantes, la instalación constante de retenes viales, el toque de queda en las poblaciones, las detenciones masivas, los allanamientos sin orden judicial y las torturas aplicadas contra supuestos guerrilleros capturados.

La situación empeoró desde mediados de la década del ochenta, cuando irrumpieron grupos de autodefensas, conformados por hombres que fueron entrenados por militares ingleses e israelitas en fincas de Puerto Boyacá, Magdalena medio boyacense; y se agravó, cuando todos ellos se transformaron en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en julio de 1997.

Los campesinos del Carare estuvieron en medio del 'sánduche' del conflicto. Fueron quienes tuvieron que soportar combates, hostigamientos y amenazas, y por eso se bautizaron como una "comunidad de paz". Según el recuento histórico de la Asociación, el 24 de mayo de 1987 lograron que las los frentes 11 y 23 de las Farc firmaran una acuerdo para no violentar más a la comunidad.

La ATCC, ya constituida legalmente ese año, se fue fortalecimiento con la creación de instituciones educativas como el Colegio INSAI (Instituto Agrícola de La India) y escuelas en las veredas La Zarca, Mate Guadua y La Pedregosa. Elaboraron pronto un Plan de Vida y desarrollaron trabajos de cultura de paz en todas las veredas y corregimientos a orillas del Carare.

Este ejemplo de resistencia fue el que quiso mostrar la periodista Silvia Margarita Duzán cuando viajó el 26 de febrero de 1990 hasta Cimitarra, Santander, para entrevistar a varios líderes de la ATCC, cuyas voces incluiría en el documental que preparaba para el Canal 4 de la BBC. Al momento de su muerte, estaba reunida en el restaurante La Tata con los campesinos Josué Vargas, presidente de la Asociación, y Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas, líderes de la organización social. Todos fueron masacrados por los paramilitares de la región sin que hasta la fecha haya una condena por estos crímenes.

>>> Durante las conmemoraciones del Festival del Río, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) elaboro balsas alusivas a la paz como un mensaje del anhelo por el que lucha esta comunidad. *Foto: suministrada ATCC.*

Pese al intento por desvertebrar la Asociación, los campesinos lograron que las Autodefensas de Puerto Boyacá no volvieran a atacar la población. La ATCC se ha caracterizado por el diálogo directo con los actores armados ilegales, un mecanismo que les ha permitido sobrevivir y que les fue reconocido, además por el trabajo comunitario, con el Premio Nobel Alternativo de Paz, concedido en septiembre de 1990 en Suecia.

La Asociación fortaleció su proceso organizativo y luchó porque se protegiera una zona conocida como La Cuchilla del Minero, afectada no solo por la deforestación provocada por la explotación de madera, sino por los cultivos de amapola que comenzaron a proliferar con la presencia de la guerrilla. Tras las múltiples peticiones, el antiguo Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) declaró en 1993 La Cuchilla como Zona de Reserva Forestal, protegiendo unas 10 mil hectáreas.

En 1995, la Asociación recibió un nuevo galardón, el premio *Nosotros el pueblo, 50 comunidades*, otorgado por Naciones Unidas en Nueva York. Y continuó con su trabajo social apoyada por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

No obstante el reconocimiento internacional, las comunidades del Carare vivían tiempos difíciles. Con el fortalecimiento de las Auc al finalizar la década de los 90, los cultivos de amapola fueron reemplazados por los de hoja de coca para la producción de clorhidrato de cocaína. Y la guerra empeoró.

>>> Los campesinos de la ATCC se caracterizan por realizar procesos comunitarios de capacitación permanente. La comunidad suma unos 10 mil habitantes a lo largo de 36 veredas en seis municipios.
Foto: suministrada ATCC.

En 2001 otros 2 mil campesinos se desplazaron tras los constantes enfrentamientos entre el frente 23 de las Farc y comandos paramilitares de las Auc. Ambos se disputaban la riqueza del territorio, marcada por montañas y conectada por ríos, queriendo además controlar la producción de coca y las rutas del narcotráfico.

La situación empeoró cuando llegó una 'lluvia' de glifosato para contrarrestar los cultivos de hoja de coca, siendo el año más grave el 2004. Esta acción estatal obligó a muchos labriegos a abandonar sus tierras, pues el químico echó a perder sus cultivos de plátano, cacao, maíz, yuca, arroz y ajonjolí, con lo que sostenían a sus familias.

En medio fragor del conflicto, los campesinos siguieron resistiendo y actualizaron su Plan para la Vida y la Paz, la hoja de ruta de la comunidad para gestionar proyectos que mejoraran su calidad de vida, reafirmaran su voluntad política de impulsar la paz, fortalecieran el liderazgo comunitario y potenciaran su acción como parte de la sociedad civil. En esencia, como lo documentó la Asociación, "para trabajar en equipo y transformar la cultura lindividualista, paternalista y dependiente".

¿Pocos logros?

Pese al empuje de la comunidad, de la visibilidad que han logrado dentro y fuera del país y a la institucionalidad que desde hace ya varios años existe para sacar a flote a comunidades como la que ella lidera, "el proceso de reparación colectiva ha sido muy largo y desgastante", opina Isabel Cristina Serna Rentería, representante legal de ATCC.

Quien se siente a conversar con los líderes de la comunidad puede invertir horas y horas reconstruyendo la historia de las reuniones y promesas que han recibido del sector oficial y revisando decenas de documentos que han acopiado para hacer seguimiento al proceso.

El archivo original del proceso de reparación colectiva suma 104 páginas. La ATCC lo ha ido depurando y le hace chequeo en un Excel organizado en las casillas de inversión, funcionamiento, gestión y articulación. Es quizá la comunidad que en el país ha hecho el trabajo más juicioso de memoria histórica. Todo lo registran, todo lo documentan.

El Plan está organizado en tres grandes medidas de reparación redactadas como Programa de Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria, Programa Agrofestal de Restitución del Medio Ambiente y Programa de Restitución de Bienes Colectivos. Entre los tres ejes, hay por lo menos 38 acciones de reparación formuladas por la comunidad y aprobadas por el gobierno, de las cuales solo tres han sido cumplidas hasta el momento, según tiene registrado la ATCC.

> "De las medidas, hemos logrado que se concrete la entrega de maquinaria, el desarrollo de la finca integral campesina y el apoyo al Instituto Agrícola de La India (INSAI). La idea es que este sea un colegio piloto que impulse prácticas agrícolas que puedan replicarse al interior de las comunidades", *explica Isabel Serna.*

La medida más atrasada es la de tierras, pues su implementación dependió en parte de la diligencia del antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación), ahora Agencia Nacional de Tierras, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), y la implementación de proyectos de mejoramiento de vivienda, polideportivos y construcción de escuelas.

Pese a la lentitud, Luis Fernando Serna Rentería, Rebeca Cano Taborda e Isabel Serna Rentería coinciden en que "no han tirado la toalla" porque son años de trabajo conjunto y no olvidan que fueron la primera comunidad campesina que se asoció en la región del Magdalena Medio en la defensa de los derechos humanos.

> "Si el proceso más antiguo de reparación colectiva del país va a esta 'velocidad', qué puede proyectarse para otras comunidades", cuestionan en la Asociación. "La experiencia adquirida en nuestra reparación debería replicarse rápidamente en otras comunidades víctimas", *sugiere la Represente Legal de la ATCC.*

Sin embargo, los campesinos reconocen que la responsabilidad del Estado no sólo recae en la Unidad Nacional de Víctimas, requiere la voluntad política y celeridad que le impriman la Gobernación de Santander, las alcaldías de los seis municipios de la zona de influencia de ATCC, varios ministerios, el Departamento de Planeación Nacional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), por nombrar algunas de las instituciones responsables, sin contar la Agencia de Tierras y la corporación ambiental.

> "Las comunidades tendremos que seguir teniendo mucha paciencia porque sentimos que el Estado no tiene un camino claro de dónde y cómo avanzar hacia el posconflicto, hacia la reconciliación y la reparación", *afirma Luis Serna.*

Lyda Camacho, coordinadora del Programa de Reparación Colectiva para la Zona Centro de la Unidad de Víctimas, reconoce que la comunidad tiene razón en que el proceso ha tardado más de ocho años, pero argumenta que la principal dificultad radica en la ausencia de un marco legal que obligue a las autoridades locales a asumir responsabilidades y cumplir los compromisos adquiridos.

"Hemos tenido que hacer una apuesta por lograr acuerdos políticos para que las instituciones se comprometan", agrega Camacho. Por ejemplo, para la entrega de maquinaria, tuvieron que emitir una resolución para que fuera la comunidad la que la recibiera y administrara; y no las alcaldías o la Gobernación.

Según esa funcionaria, la Unidad Nacional de Víctima tiene el compromiso institucional de sacar adelante éste y los otros seis procesos piloto de reparación colectiva, de tal manera que para junio de 2016 tienen planeado convocar a una "mesa de alto nivel para verificar qué medidas están pendientes y reformular algunas si es necesario".

Camacho asegura que no son tres sino diez las acciones que ya han cumplido, y que los temas relacionados con tierras, como la Zona de Reserva Forestal, la informalidad de la propiedad y las necesidades de infraestructura han tenido obstáculo por "relaciones políticas tensas" en el territorio.

Por su parte, los campesinos de las ATCC esperan que el gobierno le imprima acelerador a las deudas históricas del campo, sobre todo cuando se ha avanzado tanto en las negociaciones con las Farc. "¿Cómo aterrizar la paz si las necesidades básicas siguen siendo insatisfechas?", se preguntan en el Carare.

>>> Este es el río Minero, uno de los afluentes clave que protege la comunidad del Carare como parte de la riqueza de su territorio. *Foto: suministrada ATCC.*

Los destinos cruzados del conflicto urbano en Barranca

Estas son tres historias sobre la violencia y la memoria en el puerto petrolero y capital de la región del Magdalena Medio. La historia del Parque Camilo Torres y los testimonios de víctimas de las comunas 5 y 6 dan luces sobre el Acuerdo de Víctimas de La Habana.

ESCRITO POR **JOSÉ ADOLFO BERNAL* Y VERDADABIERTA.COM**

>>> Quien compre un tiquete de flota para llegar a Barrancabermeja, Santander, por lo general recibe un consejo: ¡quédese en El Descabezado, que desde ahí es más fácil movilizarse! ¿Descabezado? Coloquialmente mucha gente llama así al Parque Camilo Torres, en el corazón de la Avenida del Ferrocarril.

A lo largo de esa vía se forma una hilera de taxis que esperan el descargue de los buses para transportar a pasajeros que, por ejemplo, vienen desde Bucaramanga después de recibir atención médica especializada. "No se llama 'El Descabezado'; se llama Camilo Torres", corrige un conductor de una de las empresas de bus. Los foráneos preguntan por qué el 'apodo' al lugar; un turista probablemente no lo haga por miedo.

Pese a su pujanza como puerto petrolero, Barrancabermeja carga el peso de un pasado violento: secuestros, extorsiones, asesinatos y reclutamientos de la guerrilla en los años setenta y ochenta; desplazamientos, masacres y desapariciones de los paramilitares en los años noventa y el rearme de bandas criminales más recientemente.

Por todo ello, el Parque Camilo Torres es para las organizaciones sociales un lugar para la memoria histórica, con un sentido de transformación. En eso coinciden tres líderes sociales y defensores de derechos humanos que son testigos de la historia de este lugar, restaurado de a poco por iniciativa de las mismas comunidades, pero olvidado por las administraciones de turno. Los árboles siguen en pie; pero no hay un solo rastro de césped.

Marco Tulio Aguirre, integrante de la Veeduría Integral de Barrancabermeja y líder social desde hace cuatro décadas, relata que el parque tiene sus orígenes en 1964 cuando el cura Camilo Torres era capellán de la iglesia.

> **"**Él llega a plantear un sermón muy distinto. Desde el púlpito se quejaba del gobierno, cuando entonces era la época del Frente Nacional [1958-1974], cuestionaba la situación que había en el país y acompañaba a los obreros. Es cuando comienza ser conocido por estudiantes y sindicalistas**"**, *recuerda Aguirre.*

El padre Camilo Torres fue promotor de la Teología de la Liberación, de la primera Facultad de Sociología de América Latina y guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Se dedicó a los estudios socioeconómicos y propuso el Frente Unido, un movimiento de oposición a la hegemonía liberal o conservadora que buscaba atender las necesidades de las zonas rural y urbana. Cuando Aguirre era un adolescente recuerda que el sacerdote se subía al balcón de una de las casas del barrio para explicar estas ideas.

*Periodista comunitario de Barrancabermeja

>>> El Parque Camilo Torres Restrepo está justo en el barrio Gómez Galán, sobre la Avenida del Ferrocarril. Desde mediados de los años sesenta es un sitio para la memoria de los movimientos sociales del puerto petrolero, que desde entonces han exigido el respeto por los derechos humanos. Foto: José Adolfo Bernal.

En 1968, el barrio, ya formado por unas 498 casas, no tenía nombre. Aguirre narra que Luisa Piña, la primera líder comunal y concejal de Barrancabermeja, convocó a los habitantes para bautizar el poblado. Las opciones eran dos: Mario Galán Gómez, en reconocimiento al entonces Presidente de Ecopetrol que promovió la construcción de las viviendas; y el padre Camilo Torres, quien dos años antes fue asesinado y se consagró como un líder de los movimientos sociales del país. La primera opción ganó, pero la comunidad coincidió que el parque proyectado al frente debía llevar el nombre y un busto del inmolado.

Francisco Campo, dirigente social y defensor de derechos humanos, cuenta que antes de ser un parque el lugar era conocido como la Plazoleta de La Victoria. Por eso lo que puede verse en la estructura de cemento como un signo de 'chequeado' o 'visto bueno' en realidad es una ve trunca que hace alusión a la victoria. Marco Aguirre agrega que ésta hace referencia a una frase de Torres con la que reiteraba que la "victoria de los pobres está inconclusa".

Tras los tiempos en que Torres congregaba a comunidades vulnerables en el barrio, Campo recuerda que desde los años setenta el parque se convirtió en un sitio de encuentro de la población como "un grito de rebeldía de la movilización social", un lugar de "pensamiento alternativo" y un espacio "para la conciencia de Barrancabermeja por la transformación".

El parque fue escenario del Paro Cívico por el Agua en 1985, del Paro Cívico del Nororiente Colombiano en 1987, del desarrollo del Bazarte, un evento popular para la promoción de la cultura, del nacimiento del Polo Democrático Alternativo y de múltiples manifestaciones de los movimientos campesinos y estudiantiles.

Sonia María Nevado, abogada de varios movimientos sociales, indica que en los años ochenta el parque fue protagonista de La esquina del arte, una iniciativa en la que artistas populares de Barrancabermeja tenían la oportunidad de compartir sus creaciones y propuestas culturales. A mediados de la siguiente década, el parque también acogió las movilizaciones de la Organización Femenina Popular (OFP), que el 25 de cada mes, en conmemoración del Día de la no violencia contra la mujer (que oficialmente es el 25 de noviembre de cada año) denunciaba las violaciones cometidas contra las mujeres, exigiendo verdad, justicia y reparación.

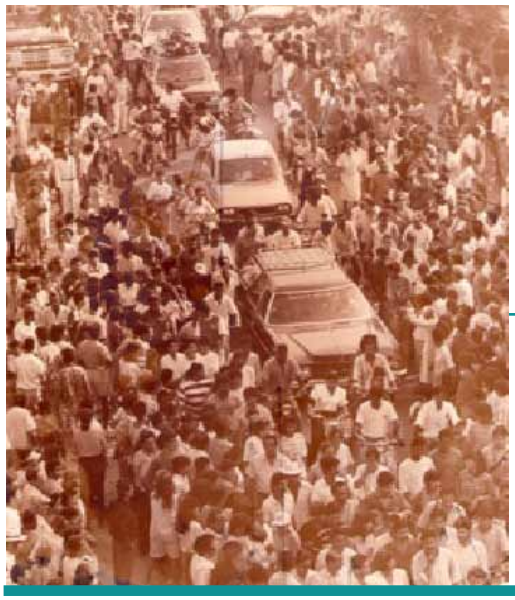
Marco Tulio, Francisco y Sonia recuerdan que este lugar de la memoria intentó ser arrasado a finales de la década del noventa, cuando los paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) llegaron al puerto petrolero. El busto que representaba la figura de Camilo Torres recibió un disparo y terminó de desmoronarse luego por la acción de una granada.

Diez años después de lo ocurrido, tras la desmovilización de las Auc en el año 2006, la comunidad decidió que era hora de reparar el parque. Aguirre cuenta que las Juntas de Acción Comunal de los barrios Galán, Torcoroma, Pueblo Nuevo, Parnaso, Uribe Uribe, Simón Bolívar y Olaya Herrera se unieron para exigirle a la Alcaldía que reparara el monumento con aquellos recursos que estaban asignados para el funcionamiento de las juntas comunales.

Para Sonia Nevado, el parque sigue en pie, pero otros lugares y encuentros de los movimientos sociales han sido borrados de a poco, por decisiones políticas no consultadas con la comunidad o porque fueron cerradas, tales como las canchas Shannon, Rivaluz y la Bombonera.

En la actualidad, estos lugares fueron reemplazados por el Centro Comercial Iwaná [El Éxito], el Centro Comercial San Silvestre y el Monumento a Pipatón, de forma respectiva. Aunque sobre varios movimientos sociales pesa el estigma de comulgar con ideas de izquierda, Nevado asegura que el nombre de Camilo Torres es representativo para el parque y los habitantes porque hace parte de la "decisión de insistir, persistir y resistir".

Ahora en pleno proceso de negociación con las Farc, y a la espera de la apertura de la mesa con el Eln, y cuando el gobierno anuncia tiempos de posacuerdo, Francisco Campo cree que "el parque siempre va a estar esperando a que los luchadores



>>> Imágenes históricas del sepelio de las cinco personas asesinadas el 24 de enero de 1992 en la masacre de El Tropezón, en el barrio La Esperanza, de Barrancabermeja. Las familias siguen esperando verdad sobre los perpetradores de estos crímenes.
Foto: suministada.

y dirigentes alternativos lleven a su seno grandes propuestas de transformación". De Barrancabermeja fueron desplazadas 36 mil 670 personas desde 1985 a la fecha actual y recibió otras 57 mil 833 personas expulsadas de otros municipios por la violencia, según el Registro Único de Víctimas (RUV). Este municipio y el río Magdalena fue testigo de por lo menos 15 masacres en las que varias víctimas siguen aún desaparecidas.

Aguardando 'La Esperanza'

El nombre de este barrio de la Comuna 5 en Barrancabermeja parece un designio. Han pasado 24 años desde la masacre de El Tropezón, un famoso billar del barrio, y las familias guardan la esperanza de que algún día habrá verdad sobre aquellos hechos que le arrebataron la vida a cinco personas, fracturaron familias y le quitaron la tranquilidad al poblado.

Richard Marcel Álvarez Ahumada es hermano de Carlos Alberto, el joven que murió después de recibir un disparo mientras conversaba con los vecinos en una esquina, diagonal al billar. Tenía entonces 22 años. Su sueño de ser Ingeniero de Sistemas fue truncado. Asegura que difícilmente puede imaginar qué haría si viera a los ojos a los asesinos de su hermano.

Perdonar es difícil, reconoce Richard, y está convencido que el proceso de paz no se limita a la firma de un documento y que supera la reconciliación entre víctimas y victimarios: "La reconciliación es querer trabajar, salir adelante y construir un país mejor para nuestros hijos. Es más un proceso interno, muy personal. Es qué quiero hacer por mi país, y cómo transformar mi vida".

El Acuerdo de Víctimas logrado en La Habana con la guerrilla de las Farc propone la implementación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición. La verdad es fundamental en lo acordado y Álvarez considera que las familias tienen derecho de acceder a ella. En dos décadas, el proceso de su hermano pasó por tribunales y lo que estos concluyen es que fue responsabilidad del Estado. Así, de forma general, sin nombres propios.

Como consta en los documentos de los procesos judiciales, dos testigos que pertenecían a la Red de Inteligencia número 7 de la Armada Nacional aseguraron en un primer momento que los responsables de la masacre eran integrantes de dicha Red, que su vez contaban con "un grupo de exterminio que planeó y ejecutó el asesinato de varias personas en Barrancabermeja". El Ministerio de Defensa negó tales afirmaciones, asegurando que los testigos buscaban desprestigiar a la institución. Tiempo después los testigos se retractaron explicando que habían recibido dinero para hacer un montaje y afectar la institución.

Quienes han realizado un proceso juicioso de documentación son las familias, que hacen parte de la Asociación Regional de Victimas del Magdalena Medio (Asorvimm) y algunos integrantes de la comunidad que participaron de un Diplomado en Derechos Humanos y Memoria Histórica, realizado en 2013 por el Espacio de Trabajadoras y Trabajadores de Derechos Humanos. Este ejercicio produjo un documento que reconstruye lo ocurrido aquel 24 de enero de 1992.

Eran las 9 y 30 de la noche cuando Gustavo Rojas, José Dolores Silva y Humberto Canchila Atencia jugaban billar y conversaban sobre la posibilidad de inaugurar una cancha de fútbol en el barrio. A la misma hora, Pablo Emilio Pinto llegó a comprar una Pony Malta, la típica bebida que tomaba antes de dormir. En la esquina estaba Carlos Alberto Álvarez Ahumada conversando con varios amigos.

En medio de gritos tildando a los presentes de "guerrilleros", varios hombres que se movilizaban en dos camionetas color gris dispararon a diestra y siniestra. Rojas, Silva, Canchila, Pinto y Álvarez fueron asesinados en el lugar. Consternados tras lo ocurrido, ningún vecino durmió esa noche. Cerciorándose de

que los crímenes quedaran impunes, los asesinos dispararon contra el contador de energía y lanzaron una granada de humo antes de marcharse para que nadie identificara sus rostros.

Esta acción paramilitar hizo parte de la larga lista de masacres que a partir de ese momento comenzaron a ser recurrentes en el puerto petrolero.

Como le contó Richard a Rutas del Conflicto, el asesinato de su hermano desbarajustó la familia. Tanto que, con el tiempo, tuvieron que salir desplazados del barrio por la perpetuación del conflicto que se prolongó durante esa década.

Para este joven de 27 años la forma de hacerle frente a las heridas ha sido precisamente la unión entre las familias. Cada 24 de enero celebran una eucaristía y entre todos se asesoran y buscan los medios legales para que el gobierno y las instituciones territoriales cumplan sus mandatos con las víctimas.

En esto concuerda la hija de una de las víctimas de la masacre, que todavía por temor prefiere la reserva de su nombre. Relata que tras el asesinato de su padre, su vida casi se echa a perder. Se sumió un tiempo en las bebidas alcohólicas, se tornó agresiva y hasta con obsesión comenzó a buscar el paradero de los asesinos. "Fue una época muy dura y difícil, hasta que sentí muy dentro de mi alma que me estaba haciendo daño... Arrodillándome ante Dios le clamé que me ayudara a superar la crisis. El dolor siempre está ahí pero el tiempo ha ayudado", dice la mujer que es líder social en el barrio.

Las palabras de esta mujer revelan decisión en su vida. "Seguimos viviendo en el barrio porque para dónde nos íbamos, si en este país todo se complicó después de lo ocurrido. Ocho años después comenzaron los desplazamientos forzados, siendo Barrancabermeja el punto más crítico de la violencia en el Magdalena Medio", dice.

La situación propia y de la comunidad la llevaron a trabajar en la Junta de Acción Comunal, en iniciativas memoria histórica, Mesa de Mujer y Equidad de Género, Red de Mujeres Organizadas e Independientes, Red de Mujeres del Magdalena Medio y por supuesto en Asorvimm, una asociación que acoge a víctimas de Santander, así como del sur de Bolívar, sur del Cesar y el nordeste antioqueño.

>>> Este es un mural de la memoria en el barrio La Esperanza, en la Comuna 5 de Barrancabermeja, para recordar a las víctimas asesinadas en la masacre del 24 de enero de 1992. Aquí los rostros de Carlos Alberto Álvarez Ahumada, Pablo Emilio Pinto, José Dolores Silva y Gustavo Rojas. En el billar también fue asesinado Humberto Atencia Canchila. Foto: suministrada

Las comunas 5 y 6 del municipio, conocidos como los barrios nororientales, cargaban con el estigma de ser escondederos de la guerrilla. Los habitantes quedaron en medio de un fuego cruzado, cuando al finalizar los años 90 se desató una batalla campal por el territorio entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Autodefensas Unidades Colombia (Auc). Los últimos acusaban a los pobladores de estas comunas como simpatizantes de la guerrilla.

Tanto Richard Marcel Álvarez Ahumada como esta lideresa concuerdan en que para aterrizar la paz en lugares como Barrancabermeja, altamente afectados por el conflicto armado, el Estado debe satisfacer primero las necesidades fundamentales y atender las preocupaciones de la comunidad.

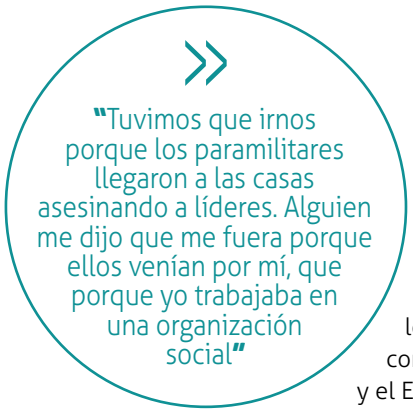
"La paz no es solo firmar acuerdos y dejar que los fusiles se silencien. La violencia seguirá existiendo si continúan los robos, si sigue habiendo desigualdad. La paz debe apostarle a cerrar la brecha que existe entre las clases sociales, mejorar las condiciones de dignidad de las personas y ofrecerles oportunidades", reitera Álvarez.

Para la líder, la dificultad para concretar la paz proviene de la constante vulneración de los derechos humanos y la desconfianza que hay entre la población. "Al campesino se le ha sacado de su entorno con violencia y engaños, entregándoles la tierra a grandes concesionarios de megaproyectos de extracción minera, hidroeléctricas y cultivos de palma y ganadería", indica.

» "La paz no es solo firmar acuerdos y dejar que los fusiles se silencien. La violencia seguirá existiendo si continúan los robos, si sigue habiendo desigualdad. La paz debe apostarle a cerrar la brecha que existe entre las clases sociales, mejorar las condiciones de dignidad de las personas y ofrecerles oportunidades"

Kennedy, el conflicto invisible

La historia de violencia de este barrio de la Comuna 6 tiene un destino cruzado con el barrio La Esperanza. Sus pobladores también quedaron en el medio de esa guerra urbana que terminó acabando con familias, desplazando a muchas y dejando heridas abiertas, aún a la espera de la verdad. María Socorro Abril, líder de la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (Asodesamuba), vivió en carne propia esta tragedia.



Desplazada del municipio de San Vicente de Chucurí y dejando toda una vida en la tierra del cacao, Abril llegó en 1996 junto a su familia al barrio Kennedy. Lo que no se imaginó es que los vecinos eran hostigados de forma constante por guerrilleros del Epl, las Farc y el Eln. Una vez llegaron al lugar, fueron declarados 'objetivo militar' del Epl "porque supuestamente nosotros veníamos a hacer algún trabajo de inteligencia a Barrancabermeja. No nos creyeron que éramos víctimas del conflicto", recuerda la mujer.

Su 'bienvenida' al barrio fue un secuestro. La guerrilla sacó encañonado a su esposo de la casa y lo mantuvo retenido dos días mientras indagaban sobre la procedencia de la familia. Vivieron en la zozobra por varios años pero no aguantaron más en el año 2001 cuando los paramilitares anunciaron que se tomarían el barrio. "Tuvimos que irnos porque los paramilitares llegaron a las casas asesinando a líderes. Alguien me dijo que me fuera porque ellos venían por mí, que porque yo trabajaba en una organización social", recuerda la líder.

Pese al miedo y a que dos de sus hijos también fueron secuestrados, Abril sacó energía y logró convocar a varias víctimas como ella para asociarse en 1999. "Nos organizamos porque no había atención. La Ley 387 de 1997 [de prevención del desplazamiento forzado] estaba vigente, pero pocos la conocían. La mayoría veníamos del campo y no sabíamos cómo era vivir en una ciudad, donde se pasan tantas necesidades", cuenta. Así nació Asodesamuba.

Pero esta iniciativa también intentó ser borrada de un solo tajo. En 2001 los paramilitares comenzaron a asesinar a varios de los integrantes de la Asociación, incluyendo familiares de Abril. Su única salida fue pedirle protección al Estado por las constantes amenazas que persistieron durante los siguientes años.

Otra mujer víctima de la violencia urbana del barrio Kennedy prefiere que su nombre no sea revelado. El miedo continúa al igual que la incertidumbre. De los seis hijos que tuvo y que crío sola como madre soltera, tres se los arrebató la guerra. En los años ochenta, el Epl le reclutó a dos jóvenes, de los cuales uno sigue desaparecido y el otro fue asesinado por las Farc a finales de los noventa. Un tercer hijo trabajaba como guardaespalda en el municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar, y fue asesinado a principios del año 2000 presuntamente por paramilitares.

En 35 años que lleva viviendo en Kennedy, desde cuando el barrio fue fundado, esta mujer ha visto todo tipo de injusticias y atropellos. Ahora no sólo saca adelante a los tres hijos sobrevivientes sino a siete nietos huérfanos de la violencia. "Hoy me siento una mujer desamparada por el gobierno. Tuve que desplazarme del barrio pero volví, pues me parece que en todos lados hay violencia. He pasado muchos papeles, denuncias y tocado las puertas de muchos sitios sin respuesta. Las víctimas merecemos respuestas concretas", dice.

Cuando a los habitantes del barrio se les pregunta por la situación de violencia actual; nadie habla. Los pocos que reportan parte del conflicto que persiste son los diarios populares de tinte amarillista. El muerto del día; la captura del día, pero los vecinos sienten que la administración pública los ha dejado a su suerte. Aunque en el barrio ya no hay una batalla entre guerrilleros y paramilitares, las noticias reportan de forma tímida el control de bandas que se financian con el expendio de drogas ilícitas. Los jóvenes son los más vulnerables y presa de una cadena sostenida no sólo por la comercialización sino por el consumo.

Las dos madres cabeza de familia creen que la solución de la paz en estos barrios es que sí haya una presencia del Estado, pero que sobre todo "aplique políticas públicas incluyentes en los temas de vivienda, educación, vías y proyectos productivos. No hay oportunidades para los jóvenes. Terminan el bachillerato y pocos entran a la universidad. Los que lo logran luego no consiguen un empleo", explica María Socorro Abril.

La líder que perdió a tres de sus hijos está segura de que las oportunidades laborales sacarán a Barrancabermeja de la violencia: "Lo único que le pido a Jesucristo es que haya paz porque es que nosotros no parimos hijos para la guerra; parimos hijos para que sean sociables y buenos hijos con sus padres".

La drogadicción, un reto en los acuerdos de La Habana

Lo que ocurre en Aguachica, municipio del sur del Cesar, es un ejemplo del reto que significará poner en marcha algunos aspectos consignados en el punto tres: Solución al problema de las drogas ilícitas, en particular lo referido a la mirada al asunto como salud pública.

ESCRITO POR **MARÍA DEL CARMEN MORALES* Y VERDADABIERTA.COM**

>>> "Todo el día ando trabado y uno hace maldades pensando en drogas. El peligro es que uno sale a la calle a robar para consumir; no para comer", dice con la mirada perdida, 'Chucky', un consumidor que reconoce que no puede superar la ansiedad que le genera el abuso de las sustancias alucinógenas.

Quienes tomaron un camino distinto fueron Erasmo Rodríguez, Bernardo Urrego, Martín Jiménez**, Camilo Duarte** y Andrés Gómez**. Todos ellos probaron alguna vez drogas ilegales y experimentaron con otras sustancias, pero pudieron frenar su consumo y hoy se encuentran en proceso de desintoxicación.

Uno y otros podrían ser familiares, amigos o conocidos, pero tienen en común que hacen parte de una realidad silente en Aguachica, un municipio del sur del Cesar, en la región del Magdalena Medio, duramente golpeado por la confrontación armada durante varias décadas.

El Vicario Episcopal del Sur del Cesar, monseñor Juan Amaya León, advierte que el consumo de drogas ilícitas es un flagelo que cada vez suma más niños y jóvenes en Aguachica: "Evidentemente ha proliferado esta situación. Encontramos muchos jóvenes vendiendo y consumiendo drogas y hay poca presencia del Estado con programas de recreación y cultura que les permita aprovechar los tiempos libres".

El llamado parece común a los problemas propios de las ciudades, pero cobra relevancia a propósito de la negociación que adelantan desde octubre de 2012 el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc para ponerle fin a la confrontación armada.

>>> En Aguachica no hay cifras que muestren una dimensión del problema de drogadicción en jóvenes. La Alcaldía estimó que los 12 años es la edad en la que los niños comienzan a consumir sustancias psicoactivas.
Foto: María del Carmen Morales.

En desarrollo de ese objetivo, se logró un preacuerdo en mayo de 2014 sobre la solución al problema de drogas ilícitas.

En ese documento queda claro que debe superarse la opción de la "criminalización" del consumidor y enfocarse como un problema de salud pública. Para ello se estableció que, una vez se alcance el acuerdo final, el gobierno nacional creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, bajo el cual se diseñará

> **"**Todo el día ando trabado y uno hace maldades pensando en drogas. El peligro es que uno sale a la calle a robar para consumir; no para comer**"**

***Periodista radial de Aguachica**
**Nombres protegidos en cumplimiento del Código del Menor

> "Mi familia es la gente de la fundación. Estoy estudiando en el colegio y ahora agarrado de la mano de Dios quiero salir de esto. Me va bien jugando fútbol. Quiero ser algún día un gran futbolista"

el Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, primando en todo ello un enfoque del respeto a los derechos humanos con enfoque de género y la participación de la comunidad.

Consumir desde niño

Tal como lo establece el punto cuatro del Acuerdo de Paz, el problema del consumo es complejo. El caso de Andrés Gómez es prueba de ello. Tiene 11 años y hace seis meses una señora lo convidó a consumir drogas. "Fue bóxer y marihuana", responde con su voz infantil, mientras explica que, por fortuna, una fundación lo está ayudando a salir adelante. "Mi familia es la gente de la fundación. Estoy estudiando en el colegio y ahora agarrado de la mano de Dios quiero salir de esto. Me va bien jugando fútbol. Quiero ser algún día un gran futbolista", dice.

No obstante, en Aguachica no hay estudios ni datos sistematizados que permitan a las autoridades tener una dimensión del problema, lo poco que se encuentra ha sido hecho de manera empírica. Un docente de una institución educativa, quien solicitó la reserva de su identidad por razones laborales, asegura que "la situación de drogadicción es más preocupante de lo que parece".

Según relata, la atención de este problema en los colegios se limita a identificar a los niños consumidores, registrar su caso en una ficha técnica, hacerles seguimiento por medio de un psicorientador y remitir su atención especializada a la respectiva Empresa Promotora de Salud (EPS). El profesor concluye que muchos niños terminan buscando un 'refugio' en la droga por problemas familiares.

Un habitante de Aguachica, que también solicitó la reserva de su nombre, indica que el caño El Cristo es conocido como una 'olla' en el municipio. "Es donde hay mayor consumo. Lo más sorprendente es que los expendedores son niños entre los 12 y 13 años de edad", afirma.

> "...el caño El Cristo es conocido como una 'olla' en el municipio. "Es donde hay mayor consumo. Lo más sorprendente es que los expendedores son niños entre los 12 y 13 años de edad"

Ese rango de edad es confirmado por Adriana del Pilar Blanco, psicóloga especialista en el área Clínica y quien trabajó durante más de cinco años coordinando el Programa de Salud Mental del municipio. Ella asegura que tomaron una muestra aleatoria en varios colegios de Aguachica, encontrando que "la edad de inicio de sustancias psicoactivas en estudiantes es a los doce años".

¿Efectos de la guerra?

En Aguachica no existe un estudio que haya documentado la posible asociación entre los efectos del conflicto armado en la región y el consumo de las sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que ha sido epicentro de acciones de las guerrillas del Epl, M-19 y las Farc en las décadas del setenta y ochenta; y luego, en los noventa, del Frente Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Paradójicamente, este municipio fue protagonista de la Primera Consulta por la Paz. "¿Rechaza usted la violencia y está de acuerdo en convertir a Aguachica en un municipio modelo de paz?", fue la pregunta a la que 10 mil habitantes respondieron afirmativamente

>>> La drogadicción hace parte de los efectos de la guerra, pues las sustancias ilícitas hacen parte de la fuente de financiación de los grupos armados ilegales. Foto: archivo Semana.

el 27 de agosto de 1995. Sin embargo, la iniciativa popular que buscaba que ningún actor armado violentara más a los pobladores fue apagada con asesinatos. Cualquier persona que perteneciera a un movimiento de izquierda o que públicamente rechazara la acción de los ilegales fue asesinada por paramilitares.

Así ocurrieron los crímenes contra el concejal José Saldaña, el 24 de noviembre de 1999; el promotor de la Consulta Luis Fernando Rincón, el 15 de agosto de 2000; el desplazamiento de los concejales Miguel Malo, Robinson Rocha y Fredy Dita en 2001; y los asesinatos del exconcejal César Alberto Passo, el 1 de septiembre de 2001; y del académico Orlando Claro, el 27 de julio de 2002. A esto se le sumaron 10 masacres perpetradas por paramilitares entre 1993 y 2002, entre ellas las de las veredas El Limoncito, Puerto Patiño, La Bocatoma, el establecimiento Tropicana, Cerro Redondo, Santa Rosa de Caracol, Las Margaritas, Los Columpios y Buturama.

En la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2014 por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, la justicia determinó -tras la investigación realizada por la Fiscalía 34- que el narcotráfico fue el 'combustible' de los paramilitares en esta región. "Se inició con el 'cobro del impuesto de gramaje', del cultivo y de laboratorios de la región", indica el fallo, agregando que Aguachica y Ocaña "son centros de tránsito obligado para el transporte de este tipo de sustancias, por las que se pagaban aproximadamente 100 mil pesos por kilo de base de coca y entre 500 mil y 600 por botella de mancha de amapola. El estupefaciente que salía del sur del Cesar por estos dos municipios, pagaba impuesto de gramaje a favor de la organización armada ilegal".

Los informes de riesgo de la Defensoría advirtieron en 2008 y 2010, que tras la desmovilización de los paramilitares en 2006 hubo un rearme en la región. Primero 'Aguilas Negras', luego 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' y ahora 'Los Urabeños'.

Las notas de prensa de los medios locales y las emisoras comenzaron a reportar de nuevo los crímenes que caracterizaron el terror paramilitar, con las mal llamadas "limpiezas sociales". En julio de 2013, por ejemplo, el diario El Pilón informó que por las calles de Aguachica comenzó a circular un panfleto con el que un grupo al margen de la Ley amenazó de muerte a varios jóvenes que consumían drogas.

"Salir es muy difícil"

Martín Jiménez reconoce que las intimidaciones lo llevaron a la decisión desesperada de pedir ayuda. "A la casa llegaron muchas amenazas, que le estaba haciendo mucho daño a la comunidad y que si no dejaba eso me iban a ir matando... Yo seguía haciendo mil maldades porque la droga me llamaba y quería consumir", relata este joven, de 17 años de edad.

Hace cinco meses comenzó un proceso de desintoxicación en una fundación del municipio tras pedirle ayuda a su mamá. "No puedo más", le dijo. Ahora trata de superar sus miedos y esos 'fantasmas' internos que lo invitan a consumir. Martín acepta que por la droga atracó, puñaleó, engatilló: "Me asustaba de ver lo que llegaba a hacer por encontrar el aliciente".

Muy similar es la historia de Camilo Duarte, también próximo a llegar a la mayoría de edad. Relata que probó las sustancias alucinógenas por invitación de la banda del barrio: "Vea, pruebe esto que con eso se va a sentir bien... comencé con marihuana, pasé al bazuco, 'H' [mezcla de heroína con otra sustancia] y pegante. Inyectado nunca metí eso porque miraba cómo a otras personas se les dañaba el cuero, la piel".

"Empecé a dejar de trabajar. La droga me fue atrapando... ya a lo último estaba tirado en la calle... Es duro porque uno lo que siente es ansiedad... Y sí, llegué a robar para sostener mi adicción"

El drama comenzó cuando tenía apenas seis años y empezaba a dar los primeros pasos en la escuela. "Me la pasaba robando motos, plasmas [televisores]... si podíamos saquear una casa completa, la saqueábamos. Desvalijamos motos, les quitábamos las llantas, los vidrios, todo lo que fuera de valor", repite Camilo. Al igual que Martín, está en un proceso de rehabilitación para superar los once años de vicio en las calles.

Bernardo Urrego llevaba la mitad de la vida en la misma tragedia. A los 25 años, en plena etapa productiva probó sustancias alucinógenas bajo el pretexto de borrar de su memoria una decepción amorosa; lo que borró fue sus logros personales y también profesionales, pues perdió el negocio de tapicería que tantos frutos le dio. "Empecé a dejar de trabajar. La droga me fue atrapando... ya a lo último estaba tirado en la calle... Es duro porque uno lo que siente es ansiedad... Y sí, llegué a robar para sostener mi adicción".

Urrego, de 48 años actualmente, explica que durante dos décadas se aisló de la sociedad. Para consumir se escondía en potreros y buscaba 'ayuda' en quienes terminaban sumiéndolo más en la adicción. "Cuando uno está en eso quiere estar solo, porque da pánico, se siente persecución", dice. Hace seis meses comenzó el proceso de rehabilitación, esperando esta vez no defraudar a su familia: "Estuve anteriormente. Ya con esta van cuatro veces. Le pido a Dios que me de mucha fortaleza, lo que pasa es que uno se engaña, pero hay que terminar el proceso y hacerlo bien", agrega.

"Un compañero de estudio me ofreció y se me hizo fácil probarlas. Me quedé consumiendo, me quedé metido... Es una vida difícil, no he podido solucionar esto, quisiera salir adelante pero no he encontrado el camino"

Tanto Martín Jiménez, Camilo Duarte, Bernardo Urrego como el niño Andrés Gómez fueron acogidos en la Fundación Hogares Nueva Vida, dirigida por Erasmo Rodríguez, a quien le dicen de cariño 'El Profe'. Él es el vivo ejemplo de que sí se puede superar la drogadicción. Como ellos, se sumergió en los alucinógenos, específicamente en el bazuco, cuando tenía 14. Y siguió durante los siguientes 22 años dejando atrás sus dotes de ciclista, atleta y futbolista, y desmoronando de paso su taller y almacén de bicicletas. "Después de diez años vino el deterioro... ya no trabaja para consumir; sino que atracaba. Comencé a meterme en problemas con la justicia".

Para Rodríguez, la droga es como "un diablo" que se mete y que difícilmente quiere salir. Por eso su proceso de desintoxicación tardó cinco años, recibiendo terapias, reconociendo cuál era el origen de sus problemas y ganándoles las batallas a los intentos de recaída. "Acá voy. Llevo 21 años sin consumir drogas", dice orgulloso.

Este camino de rehabilitación comenzó en los Hogares Crea, en Bucaramanga, con la financiación de Terpel, que pagó su tratamiento. Quienes fueron testigos de su recuperación lo invitaron a replicar la experiencia en la Fundación Santa Rita de Cascia, en Floridablanca, donde trabajó con habitantes de calle. Como una forma de resarcir el daño en Aguachica, volvió a su tierra y en la actualidad dirige su Fundación apoyando a 16 jóvenes.

La tarea no ha sido fácil no sólo por la complejidad que implica tratar a una persona adicta; también por los recursos. Erasmo Rodríguez explica que ha acudido a las rifas, venta de periódico y bolsas de aseo para reunir el pago del arriendo de la sede donde funciona la Fundación Hogares Nueva Vida: "Los jóvenes salen con una alcancía para pagar los servicios públicos porque no tenemos ninguna clase de apoyo del gobierno".

El ejemplo de Erasmo ya cala en quienes quieren terminar la tormenta. Así como el niño Andrés Gómez sueña con ser futbolista; Martín Jiménez quiere dejar de "ser una oveja negra" y graduarse algún día de doctor o abogado; Camilo Duarte sueña con ser artista o integrar el Cuerpo de Bomberos; y Bernardo Urrego, con ayudar a otros a rehabilitarse, al igual como lo hace 'El Profe'. Rodríguez sabe que haber sido padre de siete hijos ha sido también complejo, pero que siente felicidad y tranquilidad al ver que cada uno ya tiene una familia y salieron adelante.

Esta no es la historia de 'Chucky', un joven de veinte años, quien no ha logrado dejar las drogas. Sigue vagando por las calles de Aguachica desde que salió de su casa por problemas familiares. "Un compañero de estudio me ofreció y se me hizo fácil probarlas. Me quedé consumiendo, me quedé metido... Es una vida difícil, no he podido solucionar esto, quisiera salir adelante pero no he encontrado el camino", comenta. El joven reconoce que ha robado

>>> Quienes están en procesos de desintoxicación reconocen que entraron al mundo de las drogas por problemas familiares o sentimentales. Comenzaron probando sustancias siendo muy niños. Foto: María del Carmen Morales.

para sostener el consumo: "empecé a llevarme lo que podía de la casa, después no llegaba mi mamá y mis hermanos salían a buscarme. Pero ya uno adicto uno se queda como amañado".

'Chucky' cuenta que sí ha recibido amenazas por consumir drogas. "Lo amenazan a uno esos que dicen que la 'limpieza', que para matarlo, pero uno no se deja. Uno sale pitado corriendo.... Todavía no me ha llegado la hora", dice.

Esperan cumplimientos

En su programa de gobierno, cuando todavía era candidato por el partido Cambio Radical, Henry Alí Montes Montealegre prometió dos puntos para combatir el tema de drogas: "gestionaré los recursos necesarios para tratar el problema de la drogadicción en nuestros jóvenes e implementaré programas de prevención a la drogadicción, prostitución y a la conformación de grupos delincuenciales, con el apoyo de diferentes entidades competentes como el Icbf, la Policía de Infancia y Adolescencia, y Comisarías de Familia".

Ya electo en una entrevista concedida al semanario Región al Día, publicada en el 8 de abril de 2016, reconoció que el problema de drogadicción es grave en el municipio. Indicó que las autoridades habían allanado hasta el momento "12 ollas" y que trabajaban en la recuperación del cerro de La Cruz y el Alto de La Campana, así como en el parque San Antonio, conocidos en Aguachica como lugares donde se expenden y consumen sustancias alucinógenas.

Según Montes Montealegre, su idea era buscar la mejor experiencia de rehabilitación en el país para cada mes lograr atender a unos 100 jóvenes adictos. "Esa cifra puede parecer poca, pero vamos a comenzar con algo porque el tratamiento de cada joven está por alrededor de 8 millones de pesos mensuales, la recuperación efectiva tarda entre cinco y seis meses, es decir que vale más o menos 50 millones de pesos el tratamiento de una persona", dijo en la entrevista, asegurado que comenzaría la gestión una vez fuera aprobado el Plan de Desarrollo

El Alcalde fue capturado el 14 de abril de 2016 tras el escándalo en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En su reemplazo asumió como encargado el secretario de Hacienda Edder Serrano Chilatra y sólo hasta el pasado 21 de mayo el Concejo aprobó el Plan de Desarrollo titulado Por un nuevo Aguachica incluyente y en paz. En el documento, el gobierno municipal reconoce que Aguachica, por ser un corredor de comunicación entre el sur del Cesar, el sur de Bolívar, Norte de Santander, el interior del país y Venezuela, "es un escenario para abarcar múltiples formas de conflictos socio-políticos que pudiesen generar factores de riesgo que propicien el surgimiento de nuevas víctimas en el territorio".

El Plan de Desarrollo acepta que entre estos factores de riesgo están las disputas por el territorio entre grupos armados al margen de Ley y por el control de corredor vial para el tráfico de drogas ilícitas, así como el surgimiento de bandas delincuenciales.

Frente al consumo de sustancias psicoactivas, la Alcaldía propone tres estrategias: crear grupos de distintas creencias religiosas que apoyen los procesos de rehabilitación, mejorar la atención pública a los consumidores y hacer seguimiento de que las EPS cumplan con la Ley 1566, que les ordena atender

>>> La Ley 1566 de 2012 exige la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas. El nuevo Acuerdo de Paz sigue en esta vía, buscando atacar el problema de raíz. *Foto: archivo Semana.*

> "El psicólogo comienza a hacer la prevención y trabajar con la persona y su familia, y el psiquiatra se encarga de la desintoxicación, suministrándole un tratamiento para disminuir la ansiedad"

de forma integral a los consumidores de sustancias psicoactivas. De momento, estas son propuestas que siguen en el papel porque sólo hace unos días el Plan fue aprobado y aún sigue pendiente la contratación de varios funcionarios.

La psicóloga Blanco explica que el tema de la drogadicción debe ser atendido como un problema de salud mental y que para ello existe la Ley 1566, aunque "muchos la desconocen". Las EPS deben asegurar que un médico general, después de valorar el estado de salud de los consumidores, realice las respectivas remisiones para que les brinden tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

"El psicólogo comienza a hacer la prevención y trabajar con la persona y su familia, y el psiquiatra se encarga de la desintoxicación, suministrándole un tratamiento para disminuir la ansiedad", indica Blanco.

En la práctica, el cumplimiento de tal Ley es difícil. El sistema de salud es lento en otorgar citas, aprobar remisiones y medicamentos. El Director de la Fundación Hogares Nueva Vida considera que la rehabilitación en esta cadena puede fallar y que por experiencia propia lo que impide las recaídas y conduce a un proceso completo es el trabajo de acompañamiento y psicológico.

Aguachica no cuenta con una clínica propia para la atención de adictos, por lo que la remisión de los pacientes generalmente es hacia Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta, lejos de las familias. El Plan de Desarrollo promete que, en cumplimiento de la Ley, construirá un Centro de Rehabilitación Municipal.

El coronel Diego Hernán Rosero Giraldo, comandante de la Policía del Cesar, reconoce que la drogadicción es un problema en la juventud del municipio al desarrollar la campaña *Abre tus ojos* y promover los Entornos Educativos Seguros. Según el Comandante, la Policía identificó que cerca de las instituciones educativas se estaban generando espacios de expendio y consumo de sustancias alucinógenas. El 29 de abril de 2016, en una rueda de prensa, anunció la entrega del Primer Entorno Educativo Seguro tras realizar "cuatro allanamientos, varias capturas, incautar armas blancas y drogas" cerca de un colegio del municipio.

En Aguachica, los esfuerzos para hacerle frente a la drogadicción están fragmentados. Una es la lucha de las familias con jóvenes expendedores y consumidores; otra la batalla que libran los adictos; la iglesia trata de prevenir con los programas de evangelización; la Policía realiza operativos y charlas; los colegios hacen su mayor esfuerzo con la educación; el Municipio contempla varias estrategias en un Plan apenas aprobado; y fundaciones como Hogares Nueva Vida trabajan con las uñas para sacar adelante varios procesos de rehabilitación.

De cara a los procesos de paz, el Gobierno tendrá que pensar cómo unirá tales esfuerzos para que el tema de las drogas ilícitas no se limite al ejercicio de la fuerza o a la eterna espera de una remisión en las EPS. Cómo unirán iniciativas para rescatar a jóvenes productivos de las garras de la adicción será un reto para la paz afirman quienes sobreviven a esta tragedia.

Anorí quiere sanar de raíz sus heridas de guerra

Es el cuarto municipio del Antioquia con más accidentes por minas antipersona y el que históricamente ha registrado más cultivos de coca. Sus pobladores esperan que sea priorizado en el desminado y que sus propuestas de paz sean impulsadas con oportunidades económicas.

ESCRITO POR **BENJAMÍN PELAYO* Y VERDADABIERTA.COM**

>>> Berto de Jesús Mora Cárdenas tiene 83 años. Llegó a Anorí en la década del cincuenta buscando una tierra para sobrevivir. Aró y sembró con sus manos una finca en la vereda Madreseca, con la que sacó adelante a diez hijos. Hoy tiene 48 nietos y 16 bisnietos, y anhela que vivan en un municipio en paz y no en uno violento como el que le tocó a él y su familia.

Miguel Cárdenas, un anoriceño de casi 70 años, es más escéptico. Para él, la paz va a "dar brega", pues en el territorio ha habido una sucesión de actores armados ilegales y los campos siguen minados con artefactos explosivos. Cárdenas ha sido testigo de conocidos y vecinos que terminaron heridos o al borde de la muerte por no escuchar las advertencias de otros labriegos para evitar algunos caminos. "La misma gente avisaba: no se meta por tal parte pa' que no vaya a tener ningún trastorno [accidente con mina antipersonal]", recuerda.

Los testimonios de estos dos campesinos revelan las heridas de un municipio incrustado en la región del nordeste antioqueño, donde el conflicto armado desplazó en los últimos treinta años a 14 mil personas y dejó 164 víctimas de minas antipersonal, de las cuales 31 fallecieron por la gravedad de sus heridas.

> "La misma gente avisaba: no se meta por tal parte pa' que no vaya a tener ningún trastorno [accidente con mina antipersonal]"

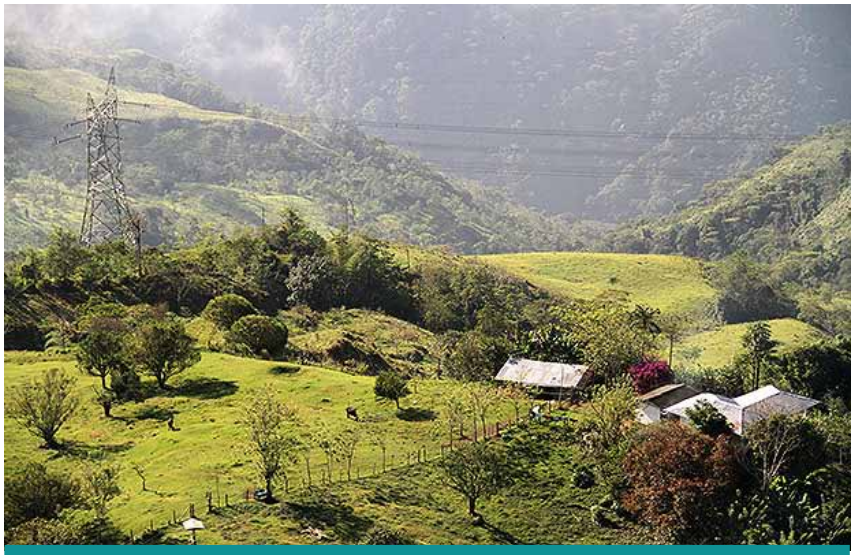
Anorí es el cuarto municipio más afectado por accidentes de minas en el departamento, después de Ituango, Tarazá y San Carlos. Allí esperan que los acuerdos sobre desminado que han logrado el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana, y de los cuales adelantan una experiencia piloto en la vereda El Orejón, de Briceño, sea un primer paso para llegar a zonas afectadas como este municipio, que todavía no han sido priorizados en el desminado.

Camino de armas

Anorí ha convulsionado por la guerra desatada en las últimas tres décadas por distintos actores armados ilegales. El primero en llegar a la región fue el Eln, pero sufrió un duro golpe tras la ejecución de la Operación Anorí, adelantada por tropas de la V Brigada del Ejército entre el 7 de agosto y el 18 de octubre de 1973. Decenas de guerrilleros murieron junto a dos de sus máximos comandantes: Manuel y Antonio Vásquez Castaño, fundadores de ese grupo alzado en armas.

Si bien se creyó que el Eln había sido desarticulado, diez años después se reacomodó y volvió a la zona del Nordeste antioqueño. Para finales de los ochenta, ya había llegado también el Frente 36 de las Farc, en el plan de expansión de esa organización subversiva. Unos y otros impusieron férreos controles a la población.

*Periodista de Puerto Berrío



>>> En 2008, el municipio priorizó las veredas Los Trozos, Concha Abajo, Concha Arriba, Liberia, La Meseta; Concha Intermedia, Chagualito, Chagualo Abajo, Chagualo Arriba, Tabacal; Brisas, La Cristina, Madreseca, Parque, Cruces y Bolívar por ser las más afectadas por el conflicto.
Foto: archivo Semana.

Para contrarrestar a los grupos guerrilleros apareció a finales de los noventa el Frente Héroes de Anorí, una célula paramilitar del Bloque Mineros de las Auc que avanzó desde el Bajo Cauca. Lo que comenzó después fue una guerra frontal por el dominio territorial que generó graves crisis humanitarias. En 1998 fueron asesinados el alcalde Héctor Emilio Piedrahita Correa y la personera Adriana María Casas, crímenes por los que fue condenada la Nación.

Pero ¿qué tenía Anorí que atrajo la guerra? Para finales de los noventa, buena parte de sus montañas estaban plagadas de hoja de coca para uso ilícito; entre sus entrañas había mucho oro por extraer; y en sus alrededores se desarrollaron grandes proyectos hidroeléctricos.

Así quedó consignado en un informe de riesgo de 2007 emitido por la Defensoría del Pueblo: "La ubicación y ventaja geoestratégica del municipio Anorí, su alto potencial minero para la extracción aurífera y la existencia de importantes recursos hídricos (Porce II y Porce III), ha sustentado históricamente la presencia de la guerrilla del ELN (Compañías: Capitán Mauricio, María Eugenia Vega y Héroes y Mártires de Anorí) y posteriormente, de las FARC, empleando el territorio para el aprovisionamiento logístico, las acciones armadas, el fortalecimiento organizativo, como fuente de captación de recursos financieros y, en el último periodo, como zona de repliegue estratégico".

En aquella ocasión, la Defensoría indicó que los desplazamientos se incrementaron en el municipio no sólo por los constantes enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, sino porque en 2001 comenzaron las aspersiones con glifosato por el aumento en las hectáreas de coca. Los campesinos, desesperados por la guerra y porque sus cultivos y afluentes fueron contaminados, salieron expulsados. El drama está registrando en cifras en el Registro Único de Víctimas (RUV), que indica que de 501 personas desplazadas en el año 2000, el municipio pasó el siguiente año 2.344 víctimas de desplazamiento.

La violencia generalizada afectó con severidad a mujeres y niños: las primeras, desde muy jóvenes, tuvieron que asumir las riendas de la familia tras el asesinato de sus padres y esposos; mientras los segundos fueron vulnerables "al reclutamiento, traumatismo psicológico, deserción escolar, orfandad y deseo de entregar al conflicto", registró el informe de la Defensoría.

Pese a la desmovilización paramilitar de 2.790 integrantes del Bloque Mineros, en enero de 2006, la guerra continuó, generando nuevos desplazamientos. El año 2011, por ejemplo, registró el mayor número de personas desplazadas: 6.181. Para esa época, había una fuerte confrontación entre el Frente 36 de las Farc y las llamadas 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia', que surgieron del reciclaje de exparamilitares que no dejaron sus armas.

El oro y la coca

La minería ilegal ha sido fuente de financiación de los grupos armados ilegales y Anorí ha sido escenario de la fiebre que desata entre quienes buscan las vetas para fines bélicos. El oro, que motivó en 1808 a Juan de la Rosa de Leonin de Estrada a fundar este poblado, se convirtió en su propia 'maldición'.

El dilema actual, más allá de los beneficios que le deja a guerrilleros y grupos criminales, es el de explotar el preciado metal o producir alimentos. A Berto de Jesús Mora le preocupa esa situación. Él cree que, si mucho vivirá otros 20 años hasta completar el siglo, pero siente incertidumbre sobre cómo prosperará el campo en el municipio: "si uno invita a una persona a trabajar no va, porque un día de jornal son 30 mil pesos; y en la mina, si sacan oro, se ganan 90 mil. Lo que está faltando es gente para sembrar comida".

>>> El periodo 2004-2009 fue el que registró más accidentes por minas en el municipio, según los datos de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. *Foto: archivo Semana.*

Pero si algo también está afectando la producción de comida es la siembra de hoja de coca para uso ilícito. Anorí hace parte del ranking de los municipios donde sigue habiendo más hectáreas de coca cultivadas en Antioquia. El más reciente estudio Monitoreo de Cultivos de Coca 2014, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, advierte que la Región Central, en la que se encuentra este departamento, presentó un incremento si se comparan las hectáreas cultivadas en 2014 respecto a 2013, pasando de 991 a 2.293 hectáreas.

"Los cultivos en Antioquia están fuertemente concentrados en Anorí, Cáceres, Tarazá y Valdivia en las estribaciones de la cordillera central en el valle del río Cauca. El tamaño de los lotes se incrementó un 38% lo cual puede explicar parte del crecimiento en el departamento", advierte el estudio, explicando que, si bien la expansión no es marcada, sí es necesario destacar que zonas donde se consideraba que la coca había sido abandonada, volvieron a estar afectadas en 2014", advierte el informe.

Se siembran minas

Como estrategia para controlar los territorios, la guerrilla de las Farc incrementó la siembra de minas que a juicio de Miguel Cárdenas siguen escondidas en varios caminos veredales pese al esfuerzo de las autoridades por encontrarlas y destruirlas.

Para el Ministerio Público, el problema de los 'sembradíos' de las minas antipersonal se acentuó entre 2004 y 2009 cuando ese grupo insurgente comenzó a 'blindar' los cultivos ilícitos. Minaba los caminos por donde transitaban los militares, afectando en realidad a los campesinos de las 52 veredas y un corregimiento que componen el municipio. Los mismos datos de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal coinciden con el estudio de la Defensoría, indicando que de las 164 víctimas por minas antipersonal, 31 resultaron heridas o fallecieron en este período.

El drama ahora lo viven las víctimas. Romero Restrepo Castaño es anoriceño y siente decepción por aquella idea que alguna vez le convenció de "ser un héroe de la Patria". Se enlistó en el Ejército y en 2013 fue enviado a la vereda Manzanillo, del municipio vecino de Campamento, para garantizar la reparación de una torre de energía.

La guerrilla no es sólo recurrente en volar esas torres sino en dejar instaladas minas antipersonal alrededor de ese tipo de infraestructura. Restrepo, quien se preparó como enfermero de combate y realizó un curso en explosivos y demoliciones, se cercioraba de que la zona estuviera libre de artefactos peligrosos, pero uno de ellos detonó. "Afortunadamente estoy con vida", dice.

Tras la explosión, estuvo 15 días en estado de coma, sedado por 25 días más y hospitalizado unos tres meses. Las marcas en su cuerpo son imborrables: perdió la pierna derecha y el brazo izquierdo, los especialistas tuvieron que hacer sus mejores esfuerzos para reconstruirle parte del rostro, la pierna izquierda, el pecho, la nariz, un ojo y el brazo derecho. En nueve años como soldado profesional no imaginó que tuviera que volver a la casa materna, "pues mi mamá es la única que me ha ayudado a salir de esto. Los héroes existen de palabra porque dónde quedamos quienes entregamos toda una vida completa y juventud, hasta partes de nuestro cuerpo", agrega.

Y es que esa es la gran paradoja en Anorí. El trabajo con víctimas de minas es aún incipiente. Restrepo explica que ha sido más desde su fortaleza interior, practicando deportes como el voleibol y el

» "pues mi mamá es la única que me ha ayudado a salir de esto. Los héroes existen de palabra porque dónde quedamos quienes entregamos toda una vida completa y juventud, hasta partes de nuestro cuerpo"

rugby, para dar testimonio a otros que como él están tratando de superar el trauma psicológico.

Graciela Vahos, representante de víctimas en Anorí, explica que solo hace dos años con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) impulsó en el municipio una campaña de prevención. "Fuimos a muchas veredas, barrios y colegios capacitando a los niños porque sabemos que, aunque han disminuido los accidentes con minas, aún están expuestos al peligro", dice.

Por su parte el personero Andrés Ciro Moreno insiste en que el desminado es una prioridad en el municipio donde, según él, hay zonas vetadas por la presencia de estos artefactos explosivos.

En el listado publicado en mayo de 2016 por el gobierno nacional sobre los 80 municipios priorizados para el desminado humanitario, Anorí no está entre los 22 por ahora seleccionados de Antioquia. "El llamado es al gobierno nacional, al departamental, a las ong y todas las instituciones que están presentes en el municipio para que vean la realidad y la necesidad de hacer un desminado de manera que la población no siga siendo afectada", indica el funcionario.

Buscan salidas

Si hay algo que genere paz es la estabilidad económica. Esa es la convicción de Félix Antonio Rojas, exfuncionario de la administración municipal que desde hace una década comenzó a forjar lo que se conoce como la Asociación Municipal de Cacaocultores de Anorí (Asomucan), que produce chocolate de mesa y chocolatinas rellenas de caramelo para su comercialización nacional e internacional. "Esto es puro cacao, no tiene preservantes ni colorantes, es cien por ciento natural", explica, emocionado.

» "El llamado es al gobierno nacional, al departamental, a las ong y todas las instituciones que están presentes en el municipio para que vean la realidad y la necesidad de hacer un desminado de manera que la población no siga siendo afectada"

La Asociación reúne a excultivadores de hoja de coca que encontraron en el cacao una oportunidad para quitarse de encima el estigma y sostener económicamente a sus familias. Antes de 2003 esto era impensable cuando la idea surgió en la Alcaldía.

"Cultivar en ese entonces una hectárea de cacao costaba 7 millones de pesos", cuenta Rojas. En 2006 con recursos del Plan Colombia, que financiaba proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos, 20 familias campesinas decidieron probar con esta semilla que al tostarla y molerla produce un alimento exquisito para la mesa colombiana.

Rojas recuerda que convencer a los campesinos no fue fácil, pero que las comparaciones los hicieron rápidamente entrar en razón. Un cultivo de hoja de coca tarda en producir un año, pero su vida útil no es de más de cinco años; un cultivo de cacao tarda en producir entre tres y casi cuatro años, pero su vida útil supera los cuarenta años. Para el representante legal de la Asociación, que ya suma 85 socios activos, el cacao triplica las ganancias y las familias están seguras, se quitan de encima el riesgo de ser amenazadas por actores armados y ser estigmatizadas.

Con la iniciativa ya marchando, Asomucan se guio por la experiencia de San Vicente de Chucurí, el municipio cacaotero de Colombia, y en 2006 solicitó capacitación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Cansados de tener que pagar maquila para la producción fuera del municipio, gestionaron los recursos para instalar una planta propia de producción. "Esta es una experiencia muy bonita, es un proyecto de vida. Esto sirve para cambiar el chip de la estigmatización, de que es un municipio violento y con minas, que es zona roja. Desde el municipio podemos hacer industria, formar y capacitar gente para el trabajo", afirma.

Después de una década de experiencia, Rojas considera que los resultados son positivos. De unas escasas hectáreas cultivadas con cacao a comienzos del proyecto, ya suman 240 generando trabajo y estabilidad para un centenar de personas. Con una planta de producción en marcha y con el apoyo de Naciones Unidas esperan pronto darles noticias a los anoriceños de que su cacao llegará al Perú. Ya dejaron

> **"...**Cansados de tener que pagar maquila para la producción fuera del municipio, gestionaron los recursos para instalar una planta propia de producción. "Esta es una experiencia muy bonita, es un proyecto de vida. Esto sirve para cambiar el chip de la estigmatización, de que es un municipio violento y con minas, que es zona roja. Desde el municipio podemos hacer industria, formar y capacitar gente para el trabajo**"**

muestras del grano en Francia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos, pero les exigen una exportación mínima de 25 toneladas. "Por ahora no podemos cumplirles con esa cantidad, pero si nos unimos con los productores de Amalfi y Guadalupe [municipios cercanos] creo que lo logramos", dice con entusiasmo.

Hacia la paz

En lo que va de 2016, habitantes como Berto de Jesús Mora y Miguel Cárdenas dan fe que el pueblo está más tranquilo pese al atentado ocurrido la noche del 9 de julio de 2015, cuando un artefacto detonó en la puerta de la Casa de Justicia, donde funcionan sedes de la Fiscalía, la Defensoría, la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación, la Comisaría y la Personería. Las autoridades indicaron desconocer los autores del hecho; los pobladores quedaron perplejos.

No obstante, son propositivos. William Velásquez, secretario de Gobierno, asegura que le ofrecieron al gobierno nacional ser una zona de concentración. Estas zonas están propuestas en el punto de Implementación, verificación y refrendación, de los acuerdos de La Habana, y corresponderá a varios lugares en el territorio nacional donde se concentrarán representantes del Gobierno, las Farc y la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) para verificar la tregua y la dejación de armas.

Este es un punto que sigue en negociación como parte de los acuerdos finales para una firma de la paz. Aunque muchos municipios quizás no contemplarían la idea de ofrecerse como zonas de concentración, el Secretario de Gobierno asegura que Anorí quiere hacer realidad su lema de "un territorio en paz".

>>> En el municipio ha habido una rotación de las fuentes de financiación de los actores armados ilegales. Primero fueron los cultivos ilícitos; ahora cobra con más fuerza la minería ilegal. Los niños siguen siendo vulnerables al reclutamiento para el funcionamiento de estas rentas.
Foto: archivo Semana.

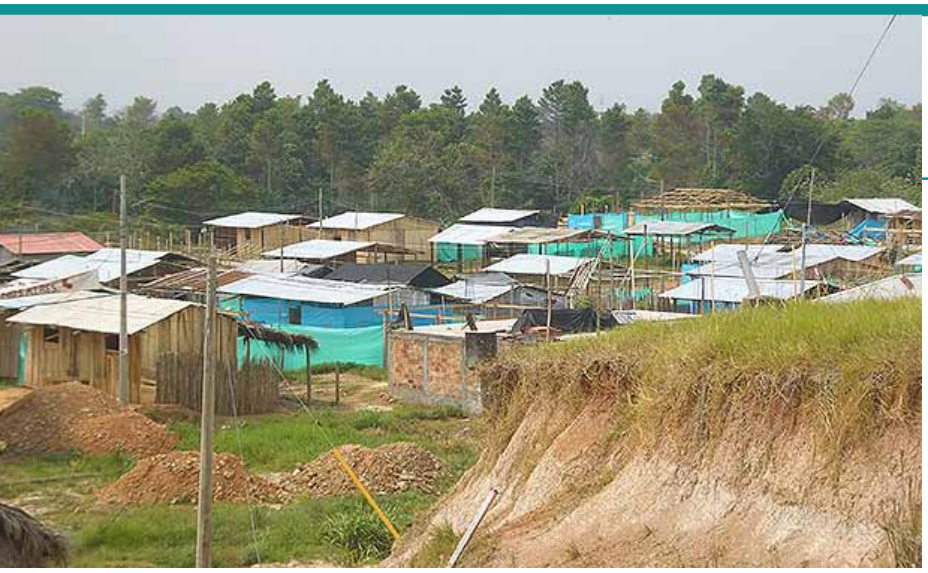
Para los anoriceños el desminado es urgente como también lo son las oportunidades económicas, y la atención integral a las víctimas. Del municipio fueron desplazadas 14 mil personas en los últimos treinta años, tiempo en el que también llegaron otras casi 7 mil también expulsadas de otras regiones del país. Sus testimonios y propuestas buscan cortar de raíz los estigmas que han llevado a cuestas por culpa del conflicto armado, así como hacer realidad la última estrofa de su himno:

Sale el sol, suena la campana
Resuénale canto del jilguero
Se oye el llanto del niño en la mañana
Se escucha el grito del arriero
y cuando termina la faena
que todos acogimos con ardor
suena el tiple, que acaba con las penas
y se danza esperando el esplendor.

Paz bajo techo esperan los desplazados de Yondó

En Yondó fueron desplazadas 16 mil personas, casi su población actual. Muchas de ellas exigen acceso a una vivienda digna, pero los proyectos prometidos están inconclusos.

ESCRITO POR **LEIDY BENAVIDES-GABRIEL MARTÍNEZ * Y VERDADABIERTA.COM**



>>> Según la Secretaría de Vivienda de Yondó, hay 17 barrios legalizados y cinco sin legalizar. Las víctimas de desplazamiento forzado esperan una oportunidad para acceder a una vivienda de interés social.
Foto: Leidy Benavides.

>>> Yondó es un municipio con un alto número de víctimas que está a 20 minutos de Barrancabermeja, el puerto petrolero del Magdalena Medio. Aunque hace parte de Antioquia, sus pobladores tienen una mezcla de acento paisa y santandereano, algo que no es extraño en un pueblo formado por familias desplazadas de ambos departamentos.

"Estamos en un momento más crítico", dice Liborio Ortega Cantillo, representante de la Asociación Regional de Víctimas de la Violencia en el Magdalena Medio (Asorvim). Según este líder, de los 18 mil habitantes censados, más de 5 mil son víctimas que llegaron desplazadas de otras regiones, y su atención si mucho es solo asistencialista, no integral. Bajo ese panorama, el acceso a vivienda digna es una de las tareas inconclusas.

Las cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), de la Unidad Nacional de Víctimas, confirman el panorama al que se refiere Ortega. En realidad, el número de personas que componen la población fue casi el mismo que fue expulsado entre 1985 y la fecha actual, cuando 16 mil 113 personas tuvieron que dejarlo todo por la confrontación entre guerrilleros del Frente 24 del Bloque Magdalena Medio de las Farc y el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Esa es la historia, por ejemplo, de José Edubán Tamayo, quien fue desplazado de la vereda Caño Don Juan cuando comenzaron a proliferar los paramilitares de las Auc. A principios de la década del noventa el mismo Ejército les dijo que se fueran "porque eso se iba a poner feo". A los habitantes los estaban tildando de colaboradores de la guerrilla. Atrás quedaron su finca y los cultivos de yuca, plátano y maíz, con los que sacaba adelante a sus ocho hijos.

Pero mientras unos salían de veredas de Yondó, otros llegaban al municipio, también con las manos vacías, de otras zonas del Magdalena Medio. Es el caso de Amparo Rodríguez, quien hace una década tuvo que abandonar la finca y los cultivos de habichuela, tomate, aguacate y naranjas con los que prosperaba junto a su esposo en Rionegro, Santander. "Un día nos llegó un papelito en el que decía que nos daban 24 horas para irnos", asegura la mujer. Ella

*Periodistas de Impacto Stéreo, de Yondó

no recuerda qué grupo armado fue culpable de esa tragedia, pero dice que fue el mismo que secuestró a su hijo de tres años, a quien encontraron con vida tres días después en una cañada.

Otra historia similar es la de Diana Leonor Puerta, desplazada en 2006 de la vereda Caño Barbudo, sur de Bolívar, por supuestos paramilitares. La tranquilidad que tenía en su tierra terminó cuando hombres armados asesinaron al inspector y al promotor de salud del pueblo y la gente comenzó a abandonar las fincas por miedo. Para entonces estaba embarazada y tenía un bebé de dos meses, una situación que se complicó aún más cuando, por problemas familiares, decidió separarse de su esposo.

Drama del pasado

Los casos de José Edubán, Amparo y Diana Leonor se suman a las 5.390 personas que, según datos oficiales, viven en condición de desplazamiento en Yondó. En sus relatos explican que primero probaron suerte en Sogamoso, Bucaramanga y San Vicente, pero por tener familiares en el municipio y por considerar que quizá obtendrían un trabajo en el sector petrolero su situación mejoraría rápido. Cosa que en realidad no sucedió. "En el municipio es tradicional la extracción de hidrocarburos y la gente podía ganar entre 2 y 4 millones de pesos, pero ese no es un trabajo estable. Estamos viviendo momentos críticos por la caía del petróleo", dice Liborio Ortega.

Yondó es un municipio relativamente joven, de 37 años, después de dejar su título como corregimiento del vecino Remedios. En 1930, la compañía multinacional Shell realizó trabajos de exploración del 'oro negro' y una década más tarde construyó Casabe 1, el primer pozo petrolero en producción de la zona. Por esa razón a los habitantes les decían 'Sheleros' y aún en los antiguos registros de la Registraduría Nacional aparece el municipio con el nombre de Yondó- Casabe. Finalmente, el pueblo asumió el nombre en conmemoración a los indígenas Yondúes, que vivían en la región antes de la conquista española.

La explotación petrolera es un componente crucial en el origen del conflicto armado en esta región. La bonanza generó buenos ingresos para

»

"En el municipio es tradicional la extracción de hidrocarburos y la gente podía ganar entre 2 y 4 millones de pesos, pero ese no es un trabajo estable. Estamos viviendo momentos críticos por la caía del petróleo"

los pobladores, pero detrás llegó la guerrilla extorsionando y secuestrando; además, el municipio se convirtió en punto estratégico para el tráfico de estupefacientes. Los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo señalan que este corredor es importante por su articulación al río Magdalena y al sur de Bolívar, un enclave de siembra de hoja de coca y producción de clorhidrato de cocaína.

Los registros de desplazamiento muestran que, a partir de 1998, cuando ingresaron los paramilitares del Bloque Central Bolívar a Yondó, las expulsiones de sus habitantes aumentaron: en 1997, los desplazados fueron 370; en 1998 pasaron a 1.369; en el 2000

>>> Así son las viviendas en las que viven víctimas de desplazamiento forzado en Yondó. Las habitaciones son improvisadas con plásticos y sábanas.
Foto: Leidy Benavides.

En medio de esta confrontación, el éxodo era permanente en Yondó y en el casco urbano fueron formándose cordones de miseria, algunos en predios que la gente fue invadiendo por falta de una pronta respuesta de los gobiernos local y departamental.

llegaron a 3.069 desplazados; y la cifra superó > las mil entre 2005 y 2008, de forma consecutiva. La Defensoría advirtió que fueron constantes los enfrentamientos entre el Frente 24 de las Farc y las Auc en los caseríos y zonas aledañas de Puerto Matilde, Jabonal, Vietnam y San Francisco.

"De ahí que las Auc hayan desplegado sus fuerzas, dando origen a un escenario de confrontación con los actores armados insurgentes con el fin de controlar también la arteria del Cimitarra, por la cual se transportan tanto alimentos, medicinas, bienes de producción y productos agrícolas como elementos precursores para la producción de estupefacientes", indica un informe de riesgo del año 2002.

Una vez desmovilizados los paramilitares de las Auc en 2006, la situación no mejoró. Una nueva alerta del organismo del Ministerio Público en 2012 advirtió que la violencia seguía siendo perpetrada por el Frente 24 de las Farc, bajo la comandancia de alias 'Pastor Alape', negociador de este grupo subversivo en las negociaciones con el gobierno nacional, así como de la Comisión Segunda Raúl Eduardo Mahecha (REM), "que viene realizando en la zona de cobro de extorsiones a varios representantes del sector minero, de hidrocarburos y ganadero en la región, y la que utiliza regularmente los corredores naturales ubicados en la parte alta del municipio, para el procesamiento y transporte de alcaloides, contrabando de armas y abastecimiento de víveres".

En medio de esta confrontación, el éxodo era permanente en Yondó y en el casco urbano fueron formándose cordones de miseria, algunos en predios que la gente fue invadiendo por falta de una pronta respuesta de los gobiernos local y departamental. Quien recorra la periferia encontrará casas levantadas sobre calles polvorientas, con soportes de madera, techo de lata y cubrimiento de lonas verdes. Adentro, las familias numerosas viven hacinadas, dividiendo los pocos espacios con sábanas. No hay servicios públicos y una gran parte del sustento diario proviene de actividades informales como la venta de minutos o el moto-taxismo.

Paz bajo techo

José Edubán Tamayo, Diana Leonor Puerta, Amparo Rodríguez y Liborio Ortega coinciden en que la llamada "paz territorial" será viable en el municipio cuando el gobierno cumpla con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, acordado el 15 de diciembre del año pasado en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. Para ellos, la clave de la reparación está en el acceso a una casa digna. Si bien han aplicado a algunos programas de vivienda de interés social, el sueño sigue inconcluso.

Tamayo, por ejemplo, logró acceder a uno de esos programas, pero el gobierno le entregó un "carta-cheque" por nueve millones de pesos. Para hacer efectivo el dinero, él y su familia debían buscar en el municipio una casa con escrituras y no la encontró, por lo que el "beneficio" lo perdieron, pues los proyectos de vivienda de interés social en Yondó escasean y los que existen son una promesa a medias. Así lo explica Amparo Rodríguez, quien durante 2015 fue representante de la Mesa de Víctimas del Municipio: "Cuando comenzamos a luchar por la construcción de 80 viviendas para víctimas del desplazamiento comencé a recibir amenazas. Decidí retirarme".

La promesa de las 80 viviendas se hizo en el período del anterior alcalde Wilfrido Uzurriaga Aponzá (2012-2015). Inicialmente se planteó la construcción con 2.400 millones de pesos provenientes del sistema de regalías; sin embargo, solo fueron entregadas 44, quedando 36 pendientes. En medio del desespero, las familias interpusieron igual número de tutelas y uno de los reclamantes se amarró a una palmera de coco en protesta frente al Concejo Municipal en febrero de 2006. En respuesta, el nuevo alcalde Gibert Cartagena Rojas (2016-2019) se comprometió a revisar la situación del proyecto.

En el actual Plan de Desarrollo, bajo el título Oportunidad para todos, el gobierno local promete la ejecución de 13 proyectos de vivienda de interés social, dirigidos a comunidades vulnerables, entre ellas a víctimas del desplazamiento y comunidades negras por un valor de 9.693 millones de pesos.

>>> José Edubán Tamayo fue desplazado de una vereda de Yondó en la década de los 90. Mientras arregla el maíz, el campesino explica que es importante una reparación integral para las víctimas del desplazamiento.
Foto: Leidy Benavides.

Sobre el antiguo proyecto de las 80 viviendas, el Plan indica que "se encuentra en análisis jurídico por declaratoria de incumplimiento por parte del contratista. Se cuentan con los recursos de la Fiducia Central y se está revisando el contrato por parte de la administración delegada para la construcción de 18 viviendas más".

El documento indica también que de los 13 proyectos de vivienda solo dos superan en 50 por ciento el estado de ejecución de obra, que están siendo desarrollados en el sector de Sitio Propio. En teoría, durante los próximos cuatro años el gobierno local garantizará 1.167 viviendas en los sectores La Laguna, Vietnam, Mangos, Rinconada, Cóndor; Caño Bodegas, Ciénaga Barbacoas, así como en las veredas del Kilómetro 5, San Francisco, Tigre, Remolinos, Caño Blanco y Punta.

El temor de los solicitantes es que las promesas queden en el papel o que lo que construyan no cumpla con materiales de calidad. "De las 44 casas [del proyecto de las 80] que entregaron en Paraíso, Naranjo, Victoria y Brisas, varias tienen problemas porque se comenzaron a caer las paredes o el agua se devuelve por las tuberías", apunta Rodríguez.

Para los líderes la única salida de emergencia a sus problemas ha sido asociarse. En el casco urbano hay por lo menos cinco de ellas, entre ellas la Asociación Personas Desplazadas del Municipio de Yondó (Asopevi), que lidera Rodríguez. Pero están cansados de que el tema de vivienda sea la excusa de los políticos de turno para convencer a sus electores, así como que los recursos destinados para población vulnerable no sean visibles.

"La Ley 1448 [de víctimas y restitución de tierras] habla de justicia verdad y reparación. La reparación integral tiene muchos componentes como la memoria histórica y la ayuda psicológica, pero en Yondó no contamos con ayudas básicas para las víctimas. Contamos con un enlace municipal de la Unidad de Víctimas y la Personería que son insuficientes", afirma Ortega.

La incredulidad tiene asidero entre la población, que prefiere evitar detalle o referirse a la política que ha gobernado a los yodonsinos durante los últimos ocho años. Y tienen razón en su silencio, si se revisa en qué pararon los mandatarios locales anteriores.

El alcalde Jorge Rodríguez Salcedo, del movimiento Alas Equipo Colombia y elegido con 2.622 votos para el período 2008-2011, fue investigado y condenado a ocho años de prisión por desviar 1.200 millones de pesos que estaban destinados para dotar de agua potable a escuelas y colegios de las zonas rurales del municipio; su sucesor, Wilfrido Uzurriaga, del Partido Verde y elegido con 2.328 votos para el período 2012-2015, fue capturado por presuntos vínculos con paramilitares tras declaraciones de los exjefes de las Auc Rodrigo Pérez Alzate e Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', quienes aseguraron haber financiado su campaña para el período 2004-2007.

El actual gobierno municipal reconoce que la necesidad de vivienda de interés social es alta. Katherine Jiménez, trabajadora social de la Oficina de Vivienda, explica que en los primeros 45 días de esta administración recibieron 527 solicitudes de vivienda de interés social, de las cuales 80 por ciento provienen de población en condición de desplazamiento.

"Le pedimos al Estado que no nos abandone, que nos escuche. Con las indemnizaciones es como si el gobierno nos dijera tome ese mercado y no nos molesten más", indica Diana Leonor Puerta, una de las víctimas de la confrontación armada en esa región del país.

Rodríguez, por su parte, explica que su familia ha tratado de sobrevivir con las uñas: su esposo logró graduarse como técnico electricista y ella trabajar en artesanías. Sin embargo, explica que las oportunidades de empleo y de acceso a vivienda propia escasean. "Ahora para todo piden certificado. Para tirar pala o azadón, piden certificado. Eso es algo que sabemos hacer porque venimos del campo", dice y reitera que la paz está precisamente en lograr que las víctimas tengan un techo digno y mejoren su calidad de vida.

» "Le pedimos al Estado que no nos abandone, que nos escuche. Con las indemnizaciones es como si el gobierno nos dijera tome ese mercado y no nos molesten más"

El sabor amargo del conflicto en San Vicente de Chucurí

En la capital cacaotera de Colombia sus habitantes fueron altamente victimizados. La represión generada por el conflicto armado marcó a los chucureños, quienes aún son temerosos de contar lo que allí ocurrió. Incluso, muchos no quieren reconocerse como víctimas.

ESCRITO POR **LEONARDO AMAYA* Y VERDADABIERTA.COM**

>>> El chocolate puro es amargo, como aquellos recuerdos que dejan tres décadas de una guerra que desplazó a varios miles de chucureños de sus tierras, incrustadas en el corazón de Santander, rodeadas de cerros, filos y mesetas, donde se producen 7 mil toneladas anuales de cacao, además de plátano, yuca, cítricos y café, sin contar que tiene un apetecido aguacate al que llaman "sanvicentano".

De estas tierras fértiles emerge, además, un pasado violento: cuna del Ejército de Liberación Nacional (Eln), escenario de cruentos combates entre guerrillas y tropas del Ejército, territorio de reclutamientos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por paramilitares.

También tiene varios registros dramáticos: el del primer secuestro cometido contra ciudadanos alemanes a finales de los años sesenta y del primer accidente con minas antipersonal una década más tarde. Además, es el cuarto municipio, de los 87 que integran Santander, con las cifras más altas de desplazamiento forzado después de Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches, albergando además a otras 3 mil 109 personas expulsadas de otras regiones del país.

Es por eso que para Germán Sandoval, Gloria Ramírez, Miriam López** y Elizabeth Mora, algunos natales del pueblo y otros que llegaron allí forzados por la violencia, les resulte complejo hablar de esta historia. Quien pise tierras chucureñas y quiera indagar sobre cómo transcurrió allí el conflicto armado se encontrará con muchos silencios, pese a que existen varias asociaciones que acogen a unas 300 víctimas del desplazamiento, entre ellas Asodesplasan, Asodesanv, Agroyari y Asodesam.

Durante casi 20 años, San Vicente parecía no tener habitantes propios. En parte, por el mal funcionamiento del Hospital San Juan de Dios, pero también porque los padres no querían que sus hijos fueran registrados como originarios de este lugar, "pues decían que el pueblo era guerrillero". Eso explica por qué en las cédulas de muchos jóvenes el lugar de expedición corresponde al puerto petrolero de Barrancabermeja o a Bucaramanga, la capital departamental.

Con el reciente anuncio del fin del conflicto armado con la guerrilla de las Farc y con una posible apertura de negociaciones con el Eln, los chucureños esperan que el Estado siga poniendo los ojos sobre este municipio de 34 mil habitantes. El 16 de enero de este año el presidente Juan Manuel Santos anunció que San Vicente ya estaba libre de sospecha de presencia de minas antipersonal después del trabajo de desminado humanitario que se realizó en 16 de las 37 veredas que componen al municipio.

Esperanzados en la implementación de los Acuerdos de La Habana, sus pobladores confían en el desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que promete no solo contar las verdades de lo sucedido, sino resarcir el daño a sus habitantes, buscando además a los desaparecidos, de quienes no se lleva un registro. "A mí no me da miedo ni vergüenza de decir que soy víctima. En 28 años no he descansado buscando a mi hermano", dice Sandoval.

***Periodista comunitario San Vicente Stéreo**
*****Nombre protegido a solicitud de la fuente*

>>> San Vicente de Chucurí, la capital cacaotera del país, fue azotada por la violencia de las guerrillas y los paramilitares. Es el cuarto municipio de Santander con más víctimas de desplazamiento; y el sexto con más reclamaciones de restitución. Foto: archivo Semana.

Un conflicto 'cocinado'

La violencia en este municipio tiene sus orígenes en la década del treinta, del siglo pasado, cuando, influenciados por el Partido Socialista Revolucionario, varios campesinos quisieron unirse a una insurrección nacional que falló en su intento. El investigador Alejo Vargas, en su texto *Tres momentos de la violencia política en San Vicente de Chucurí*, explica que, seguido a esto, en los años cincuenta aparecieron las guerrillas liberales tras el asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitán. En el pueblo, estas huestes fueron lideradas por el concejal Rafael Rangel, quien se oponía a la persecución desatada por los conservadores y la policía chulavita, y al despojo de tierras que ya tenía sus primeras expresiones basada en la filiación política.

Según Vargas, desde entonces el pueblo fue fracturado: las guerrillas liberales mandaban del río Chucurí hacia abajo, mientras los conservadores en la parte norte del casco urbano. Estos últimos se enfocaron en la conformación de grandes haciendas, varias de ellas hechas con fincas usurpadas a los liberales.

La constante represión oficial, las condiciones de pobreza del campesinado sin tierra y la influencia de la revolución cubana fueron las semillas del surgimiento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), bautizada así el 4 de julio de 1964 en la vereda La Fortuna en el Cerro de los Andes. Varios integrantes de las guerrillas de Rangel se sumaron al nuevo grupo liderado por Fabio Vásquez Castaño, un joven quindiano quien para ese entonces tenía 24 años y había sido entrenado por Fidel Castro en Cuba.

A la incipiente guerrilla, que llegó a tener casi 5 mil hombres, pero que ahora no superaría los 2 mil, se unió Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'. El chucureño ingresó al Eln con apenas 14 años y asumió en 1998 la comandancia del grupo tras la muerte de Manuel Pérez, alias 'El Cura Pérez', líder histórico de esa organización guerrillera; además, es miembro del Comando Central (Coce), del que también hacen parte Israel Ramírez, alias 'Pablo Beltrán', y Eliécer Herlinton Chamorro, alias 'Antonio García', quienes son los negociadores oficiales ante el gobierno de Juan Manuel Santos en un proceso que tiene dificultades para su inicio.

Desde San Vicente de Chucurí esta guerrilla organizó la primera incursión guerrillera en el vecino municipio de Simacota, realizada el 7 de enero de 1965 en la que murió Pedro Gordillo, alias 'Capitán Parmenio'. Este fue el nombre que asumió el Frente que luego se extendió por Barrancabermeja, Lebrija, El Carmen de Chucurí y Zapatoca. En la región fueron cada vez más constantes los combates, entre ellos el de Patio Cemento el 15 de febrero de 1966, en el que resultó muerto el cura Camilo Torres, miembro de esta guerrilla y pionero de la Teología de la Liberación.

»

"A mí no me da miedo ni vergüenza de decir que soy víctima. En 28 años no he descansado buscando a mi hermano"

>>> El municipio de San Vicente de Chucurí ya está libre de las minas antipersonal, según el anuncio realizado por el Gobierno Nacional en enero de 2016. *Foto: archivo Semana.*

Las extorsiones y los secuestros se convirtieron en la orden del día, entre ellos el cometido en 1969 contra varios directivos de una compañía alemana que realizaba explotación maderera en Campo Capote, un corregimiento de Puerto Parra. Los germanos abandonaron las instalaciones, la maquinaria y el proyecto de escuelas que ya funcionaba en el pueblo. Durante dos décadas, las guerrillas fueron el actor con mayor presencia en la zona, sumado a la llegada del Frente 12 del Epl y el Frente 46 de las Farc.

Los años ochenta fueron críticos. Las dos sentencias de restitución de tierras proferidas hasta el momento en San Vicente documentan que los movimientos sociales tuvieron su mayor expresión en esta época, alentados en gran parte por la izquierda. De allí partieron movilizaciones campesinas populares que condujeron al Paro Cívico de 1987 y a las Marchas Campesinas de mayo de 1988, luego perseguidas y estigmatizadas por las nacientes autodefensas que ya se entrenaban en fincas de Puerto Boyacá, Boyacá.

El Registro Único de Víctimas (RUV) muestra que en 1988 se dispararon los desplazamientos, con 533 casos denunciados, una cifra que se mantuvo alta hasta el 2008, cuando las expulsiones por el conflicto no bajaron de 200.

» "En las veredas los chucureños eran tildados de "guerrilleros", de manera que, en los noventa los bombardeos fueron más intensos. "Se llevaron a cabo operaciones 'rastrillo' en las veredas San Cristóbal, Arrugas, El Filón, Albania y La Tempestuosa, entre otras, dejando como saldo desapariciones de campesinos, torturas y saqueos"

En la década del ochenta el Ejército aumentó su tropa con la instalación del Batallón Luciano D'elhuyar, ampliamente custionado en las versiones de exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el proceso de Justicia y Paz por su presunta complicidad en la propagación de las autodefensas autoproclamadas como Muerte a Secuestradores (MAS), 'Los Grillos' y 'Los Tiznados'.

En las veredas los chucureños eran tildados de "guerrilleros", de manera que, en los noventa los bombardeos fueron más intensos. "Se llevaron a cabo operaciones 'rastrillo' en las veredas San Cristóbal, Arrugas, El Filón, Albania y La Tempestuosa, entre otras, dejando como saldo desapariciones de campesinos, torturas y saqueos", indica una sentencia de tierras proferida el 14 de octubre de 2015.

La Brigada 2 del Ejército fue también denunciada de ir con listas en mano por la zona rural acusando a los campesinos de pertenecer a la subversión, provocando que muchos dejaran sus parcelas y se refugiaron en los Albergues de Campesinos Damnificados por la Guerra.

Varios integrantes de estos Albergues, que denunciaban la complicidad entre miembros del Ejército y las autodefensas, fueron asesinados, como ocurrió el 28 de enero de 1993 con los campesinos Leonardo Rangel, Isnardo García, Jorge Pacheco y su esposa, los dos primeros asesinados y los otros dos torturados en el sitio Las Arrugas, en la vereda San Cristóbal. El documento más completo que advierte sobre la impunidad de estos crímenes y la participación del Estado en los asesinatos, desapariciones y desplazamientos fue el informe elaborado por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, publicado en 1992.

Al finalizar los noventa, las autodefensas se sumaron a las Auc, organización impulsada por los hermanos Carlos y Vicente Castaño. A la región llegó unos de sus brazos más crueles, el Bloque Central Bolívar con el Frente Isidro Carreño, que asumió el nombre de un viejo comandante de las autodefensas de San Juan Bosco de la Verde, un corregimiento del municipio de Santa Helena del Opón.

Líderes y políticos que pertenecían a cualquier movimiento que 'oliera' a ideas de izquierda eran

amenazados o asesinados por ese grupo paramilitar, como ocurrió con los concejales Etilvia María Navarro, del Frente de Izquierda Liberal Auténtico (Fila) en febrero de 1995, y Humberto Parada, del mismo movimiento, en mayo de 2002.

Los paramilitares se desmovilizaron en 2006 y atrás quedó un rastro de violencia que fue documentado por la Unidad de Justicia y Paz, pero faltan aún las confesiones de las dos guerrillas que por años fueron responsables de la barbarie ocurrida en San Vicente de Chucurí.

El abandono y despojo de tierrras, por ejemplo, fue alto. Cuando las cifras de la Unidad de Restitución fueron públicas, a corte de mayo de 2013, los reportes indicaban que el pueblo ocupaba el sexto lugar en Santander con más reclamaciones, pues sus habitantes solicitaban cinco mil hectáreas que fueron abandonadas o despojadas por el conflicto.

¡Necesitamos reparación!

Han pasado 28 años desde que el joven de 24 años, Ludwing Sandoval fue detenido y desaparecido sin que su familia conozca los responsables de este crimen, considerado de lesa humanidad. Era la proeza del ciclismo chucureño. Había logrado destacarse en diversas competencias y pensaba radicarse en Bucaramanga para mejorar sus entrenamientos y rendimiento deportivo. Su hermano Germán ha salido a marchar exigiendo verdad y reparación durante las conmemoraciones del Día Nacional de las Víctimas, logrando impulsar un proceso de memoria único en su municipio.

Después de años de insistencia, logró que el Concejo Municipal aprobara el 30 de noviembre de 2009 el Acuerdo 028, con el que la Alcaldía institucionalizó la Clásica de Ciclismo Ludwing Sandoval, que desde entonces se realiza cada octubre durante dos días. Aunque ha tenido dificultades con varios políticos de turno, el año pasado puso a correr a seis ciclistas de talla nacional e internacional y a convocar a los chucureños para recordar la memoria de Ludwing.

"Seguiré luchando por saber la verdad. Les he dicho a otras víctimas que no sientan miedo, que no piensen que van a ser rechazados por exigir reparación y saber qué fue lo que sucedió", dice Sandoval, explicando que su hijo lleva el nombre de su tío, a quien está impulsando también como ciclista para continuar con el legado familiar.

>>> La década del 80 fue la más violenta en San Vicente de Chucurí. El Centro de Investigación y Educación Popular y la Comisión Intercongragacional de Justicia y Paz documentaron las torturas, masacres y desapariciones perpetradas por autofensas y miembros del Ejército. *Foto: tomada del informe de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz.*

De otro lado, las reclamaciones de Gloria Ramírez y Miriam López** ponen en evidencia el drama del desplazamiento; la primera llegó del Quindío expulsada por la guerrilla; la segunda es chucureña y pide que se le proteja la identidad porque aún siente temor. A Ramírez la guerrilla le mató el esposo y su hijo fue desaparecido por paramilitares cuando se desempeñaba como guardaespalda. Con los brazos cruzados y una nueva familia que fue forjando de a poco se le rebeló al silencio que imperaba en el pueblo chucureño.

Ramírez ingresó a la Asociación de Desplazados de San Vicente de Chucurí, siendo elegida su representante legal y más tarde asumiendo la Coordinación de la Mesa de Víctimas. "La Mesa solo funcionó hasta 2015, en realidad no recibimos apoyo municipal. La Ley de Víctimas es hermosa, el papel lo aguanta todo, pero la gente está cansada de que la visiten en las veredas y le pidan documentos y más documentos sin que llegue la reparación ni aparezcan sus seres queridos", dice la líder.

Miriam López, una mujer de avanzada edad, afirma que ya no sabe qué hacer. Vive en arriendo en una vereda del municipio a la espera de que el gobierno busque a su hijo que fue desaparecido. En la zona rural fue testigo de múltiples enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares, de tener que echar a correr por el campo para no dejarse alcanzar de las balas y asistir a reuniones obligadas. Evitó que su hija fuera reclutada siendo una niña; pero su vida quedó hecha trizas cuando se llevaron a su hijo mayor.

Elizabeth Mora González es socióloga y también testigo de la violencia política. Ella, exalcaldesa del municipio de La Belleza en los años ochenta y más

***Nombre protegido a solicitud de la fuente*

>>> El cacao ha permitido sostener la economía de San Vicente de Cuchurí, pese a los embates que ha dejado una guerra de tres décadas.
Foto: archivo Semana.

tarde Inspectora de Policía en San Vicente de Chucurí, era la esposa de Edwin Pompilio Gómez Rojas, alcalde de Macarativa [2001-2003], asesinado el 26 de mayo de 2002 por paramilitares. Esta mujer recuerda que en la región las Auc amenazaban a cualquier político que no 'comulgara' con sus ideas y para entonces, cuando se celebraban los comicios presidenciales, intimidaron a quienes simpatizaban y apoyaban la candidatura de Horacio Serpa. Este candidato por el Partido Liberal había sido cofundador del Frente de Izquierda Liberal Auténtico (Fila), movimiento que fue perseguido por las autodefensas en la región.

La falta de voluntad política para atender a la población víctima condujo a Mora a fundar la Asociación Agroecológica Yariguíes (Agroyari), acogiendo a personas en condición de desplazamiento y vulnerabilidad. Su preocupación está en el acceso a tierras, que estas familias logren tener una parcela propia para hacer productivo el campo y prosperar.

Con indignación, esta líder social explica que entre 2011 y 2012 recavaron todos los documentos necesarios para solicitar la titulación de unas 16 fincas que favorecería a 234 familias sin tierra; sin embargo, los procesos de extinción de dominio sobre los predios no prosperaron y, a cambio, allí se desarrollan proyectos de caucho y palma.

En San Vicente la permanencia de este tipo de proyectos es una preocupación en relación con la implementación de los acuerdos que se rubriquen en La Habana con la guerrilla de las Farc, pues son la garantía para mantener la calidad de vida del campesinado que trata de sobrevivir con la producción agrícola y que durante los últimos años se resiste a la explotación de carbón con títulos mineros ya concedidos. No quieren que sus tierras se conviertan en una réplica de la mina San Luis, municipio vecino del Carmen de Chucurí.

Muchos chucureños quisieran no hablar del pasado violento de su pueblo; otros creen que ya es necesario. Mientras tanto, endulzan el cacao que cultivan en sus fincas tratando de pasar ese sabor amargo que les arrebató a sus seres queridos, la tierra y la tranquilidad por muchos años.

> "La Mesa solo funcionó hasta 2015, en realidad no recibimos apoyo municipal. La Ley de Víctimas es hermosa, el papel lo aguanta todo, pero la gente está cansada de que la visiten en las veredas y le pidan documentos y más documentos sin que llegue la reparación ni aparezcan sus seres queridos"

Simití, una comunidad que lucha por sellar sus 'fracturas'

Los campesinos de este municipio del sur de Bolívar esperan que el gobierno les cumpla con la reparación colectiva. Llevan una década formulando planes y propuestas para que los apoyen en la superación de las secuelas del conflicto armado, pero todo sigue en veremos.

ESCRITO POR **BLANCA ISABEL HERRERA* Y VERDADABIERTA.COM**

>>> Si hay una comunidad que se ha esmerado por romper el silencio, reconstruir lo que les sucedió y exigir que el Estado los repare, es la de Simití, en el sur de Bolívar. Más de treinta años de conflicto armado tuvo efectos nefastos: obligó a la mayoría de sus habitantes a abandonar la región; sus mujeres fueron violentadas; niños y jóvenes terminaron en grupos armados ilegales; y dejó sumido al pueblo en la pobreza.

Una vez los paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se desmovilizaron el 31 de enero de 2006 en el vecino municipio de Santa Rosa del Sur, los habitantes de Simití estimaron que había condiciones para contar lo que les sucedió y preparar su reclamación por los daños causados durante una guerra atroz.

Para entonces ya estaba en vigencia la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, con la que se prometía reparar a las víctimas una vez los juicios contra los desmovilizados de la Auc se concretaran en sentencias.

Con la ilusión de que su municipio se convirtiera en un territorio de paz y que el Estado concentrara sus esfuerzos después de tantos años de abandono, la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) comenzaron a acompañar a las comunidades de los corregimientos de Monterrey, Santa Lucía, San Blas, San Joaquín y El Paraíso, organizadas en el Comité Cívico del Sur de Bolívar.

De manera conjunta, elaboraron un documento de diagnóstico participativo del daño colectivo generado por el conflicto armado e identificaron las acciones que debía implementar el gobierno nacional para repararlos.

>>> Los campesinos en Simití esperan que el plan de reparación colectiva sea una luz para mejorar las condiciones de vida de los corregimientos de Monterrey, Santa Lucía, San Blas, San Joaquín y El Paraíso. *Foto: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.*

Mientras los campesinos esperaban que los tribunales de Justicia y Paz emitieran la primera sentencia contra Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', jefe del grupo paramilitar que operó en la región, le presentaron en 2012 el documento de sus reclamaciones al entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y a Paula Gaviria, directora para la época de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (Uariv).

***Periodista de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio**

>>> El corregimiento El Paraíso vivió un infierno durante la toma paramilitar de finales de los 90 y mitad de la siguiente década. Los combates desplazaron a muchos campesinos, que a su retorno encontraron viviendas destruidas.
Foto: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Pero no sucedió nada. El gobierno les dijo que ya había entrado en vigencia una nueva norma de justicia transicional, la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se aplicaría a los procesos de reparación que ellos exigían.

Cuando el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá profirió el 30 de agosto de 2013 la primera sentencia contra alias 'Julián Bolívar', los magistrados ordenaron a la Unidad Nacional de Víctimas la atención de la comunidad campesina azotada por el conflicto, por lo que el 30 de abril de 2014 aceptó el registro de los campesinos de los cinco corregimientos de Simití como sujetos de reparación colectiva.

No obstante, han pasado dos años desde entonces y aún no se concreta un documento final para que comience la implementación de esas medidas de reparación. Gil Alberto García y Avelino Hernández, dos de los líderes del Comité Cívico, explican que su desacuerdo está en que gran parte de las medidas, según la Unidad, deben ser cumplidas por la administración local. A su juicio, el problema es que el municipio es de sexta categoría y carece de recursos para atenderlas.

Un territorio cercado

Simití es un ejemplo de la contradicción que vivieron los territorios con más riqueza natural del país. Al limitar con la Serranía de San Lucas, estar bañado por el río Magdalena y próximo a la región de los Montes de María, sus tierras eran apetecidas por el oro que guardan sus entrañas, la calidad de la tierra para sembrar palma aceitera, el clima, que es beneficioso para el cultivo de hoja de coca para uso ilícito, y sus selvas, que esconden centros de procesamiento de la coca. Por tales razones, ha sido una región intensamente disputada por distintos actores armados ilegales.

>>> El corregimiento El Paraíso vivió un infierno durante la toma paramilitar de finales de los 90 y mitad de la siguiente década. Los combates desplazaron a muchos campesinos, que a su retorno encontraron viviendas destruidas.
Foto: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

El primero en llegar, en los años setenta, fue el Eln, con el Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa; en la siguiente década lo hizo las Farc a través del Frente 24; y a finales de los noventa surgió el Frente Vencedores del Sur del Bloque Central Bolívar de las Auc.

En los planes de reparación colectiva, la comunidad campesina documentó que la guerrilla fue responsable de una violencia constante durante dos décadas, que dejaron los campos de las veredas contaminados con artefactos explosivos. En 1993, la Brigada Móvil 2 del Ejército encontró que la zona de influencia de los corregimientos Monterrey, Santa Lucía, San Blas, San Joaquín y El Paraíso estaba sembrada con por lo menos 1.488 minas antipersonal.

"Tal instalación fue realizada por las Farc y el Eln para aislar la zona y resguardarla de la presencia de la institucionalidad militar, así como de otros armados ilegales poniendo en grave riesgo a la población civil", indica la resolución que reconoce a los habitantes de estos corregimientos como sujetos de reparación colectiva.

Según datos de la Dirección contra Minas, entre 1991 y 2010 fueron reportados 47 accidentes en Simití, que dejaron 39 personas heridas y 8 más fallecieron debido a la gravedad de sus heridas.

Para los campesinos, la violencia alcanzó los más altos topes entre 1998 y 2005, cuando los asesinatos, los desplazamientos y las desapariciones ya ni siquiera eran noticia.

Las cifras de desplazamiento ponen en evidencia la dimensión de esa tragedia: de 290 personas desplazadas en 1997; el municipio pasó a expulsar durante el siguiente año a 2.193. Según las confesiones de paramilitares en Justicia y Paz, 1998 fue el año en que las Auc ingresaron a Simití, en una ruta que incluyó los corregimientos de Cerro Burgos, Monterrey y San Blas.

Justamente San Blas fue elegido por alias 'Julián Bolívar' para instalar allí una red de telecomunicaciones, una emisora y una base de 'entrenamiento'. En la reconstrucción de los hechos de violencia cometidos a finales de la década, los campesinos recuerdan una batalla campal entre paramilitares y guerrilleros.

>>> El Comité Cívico del Sur de Bolívar ha venido recibiendo acompañamiento técnico y capacitación de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio con el apoyo de la OIM entre otras organizaciones, haciendo procesos de recuperación de memoria histórica de lo ocurrido e identificando sus necesidades. *Foto: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.*

Pero las afectaciones fueron dramáticas: durante casi siete años los centros de salud fueron ocupados, saqueados y el escaso personal médico amenazado; asimismo, los centros educativos también se convirtieron en escenario de guerra. Los grupos armados ilegales entraban a las escuelas a llevarse los niños para engrosar sus filas; los profesores vivían con el "credo en la boca" tras las constantes amenazas en su contra, razón por la cual algunos se desplazaron; los colegios dejaron de graduar bachilleres hasta 11 grado y las cátedras se redujeron a 9 grado escolar.

De otro lado, las fincas fueron invadidas y despojadas. Hasta mayo de 2013, en Simití las reclamaciones de restitución de tierra sumaban 17 mil 477 hectáreas. Los campesinos de El Paraíso en realidad vivieron un infierno: sus viviendas fueron quemadas tres veces. Cuando los campesinos regresaban de las montañas, donde trataban de resguardarse de la balacera, se encontraron que en sus casas ya no estaban los enseres, ni los animales, ni las herramientas de trabajo.

El 7 de agosto de 1999, por ejemplo, 110 paramilitares del Bloque Central Bolívar llegaron hasta la vereda El Piñal, del corregimiento San Luis, asesinando a seis personas, acusándolas de

>>> El 30 de abril de 2014 la Unidad Nacional de Víctimas reconoció al Comité Cívico del Sur de Bolívar como sujeto de reparación colectiva.
Foto: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

participar en la planeación del secuestro del Fokker 50 de Avianca, perpetrado el 12 de abril de ese año por el Eln. Dos meses después, en octubre, los paramilitares decapitaron a una mujer en El Paraíso y exhibieron su cabeza públicamente generando un éxodo. Luego, se robaron 700 cabezas de ganado que servían de sustento económico a los pobladores.

El confinamiento fue tal que los paramilitares negaron la circulación del peso colombiano e implementaron un sistema de vales o recibos y solo bajo su autorización permitían la comercialización de servicios y alimentos.

"Monopolizaron los procesos económicos de los habitantes de la zona. Controlaban desde la compra, venta, distribución y transporte de alimentos, víveres, bienes e insumos. Los campesinos eran obligados a entregar su ganado y especies menores para actividades como marchas obligadas y alimentación de la tropa", indica el documento construido por la comunidad.

En la reconstrucción de hechos, los campesinos aseveran que los paramilitares se tomaron los pocos espacios de recreación de los jóvenes, como las canchas de fútbol, para convertirlas en lugares de entrenamiento militar; robaron los equipos que permitían el funcionamiento de las líneas telefónicas administradas por Telecom; prohibieron el uso de telefonía celular; y amenazaron a cualquier empresa o persona que prestara dicho servicio. Ambientalmente destrozaron el playón El Sombrero, en San Blas, porque rompieron el dique para sembrar palma africana.

La libertad de culto fue violentada. Según el relato de los campesinos, los sacerdotes Albeiro Quevedo y Clemente Verel fueron desplazados del pueblo, y en reuniones y corrillos los paramilitares pregonaban la inexistencia de Dios. Sin embargo, fueron las instalaciones de las iglesias Católica y Evangélica las que sirvieron de resguardo a los pobladores cuando el grupo armado se metía a sus fincas para desatar combates que tardaban días.

"Las iglesias de San Joaquín sufrieron por el enfrentamiento y ocupación de los paramilitares. La comunidad a orillas del río Boque tuvieron que dormir con sus familias en el templo por más de cuatro meses porque alrededor de sus viviendas funcionaban las trincheras de los paramilitares", reseña el documento de daños construidos por la comunidad.

En ese período en que se exacerbó la violencia, entre 1998 y 2005, la inversión social quedó estancada y la contratación pública capturada. Los campesinos relataron que los paramilitares intervinieron en la asignación de las obras, principalmente en los recursos destinados para infraestructura en servicios públicos domiciliarios. "Negaron a la comunidad la oportunidad de mejorar las vías. Monopolizaron los contratos y amenazaron a contratistas".

> **...**Las mujeres fueron violentadas. Quienes trabajaban en bares o discotecas fueron obligadas por los paramilitares a "vestirse como ellos deseaban y a realizar actos sexuales". En el campo, eran forzadas a la lavarles la ropa, a cocinar, hacer aseo o asistir reuniones. Los abusos sexuales y el reclutamiento de niñas fueron comunes en los cinco corregimientos"

Aunque los niveles de violencia se redujeron después de la desmovilización de los paramilitares a principios de 2006, el conflicto armado continuó esta vez no solo por la presencia de las guerrillas, sino por grupos armados ilegales conformados por mandos que no aceptaron la oferta del gobierno y decidieron no reinsertarse a la vida legal.

>>> La Unidad Nacional de Víctimas reconoce que los campesinos de Simití fueron vulnerados durante el conflicto armado en sus derechos a la seguridad, la libre circulación y realización de prácticas sociales, económicas y culturales. *Foto: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.*

Un informe de riesgo emitido en junio de 2012 por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advierte que las Farc y el Eln retomaron el 'control' y las 'rutas' de las negocios ilícitos, pero comenzaron a ser disputados por bandas criminales posdesmovilización. En la actualidad, hacen presencia las llamadas 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia', conocidas también como 'Urabeños' o 'Clan del Golfo'.

Las claves de la reparación

El Comité Cívico del Sur de Bolívar tiene documentados 36 hechos asociados a los daños que los 'fracturaron' como comunidad y proponen por lo menos 93 medidas de reparación que permitan que las víctimas de los corregimientos de Monterrey, Santa Lucía, San Blas, San Joaquín y El Paraíso tengan mejores condiciones de vida. Según la propuesta de la comunidad campesina, estas medidas beneficiarían a por lo menos 1.800 familias que viven aún en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

De forma paralela, la administración municipal pasada propuso un plan adicional de reparación para el Hogar Juvenil de Monterrey, que acoge a niños y jóvenes entre los 7 y 18 años y que nació como una estrategia pedagógica en 2007 para prevenir el reclutamiento. Este documento incorpora otras 10 medidas de reparación con las cuales se pretende atender los daños psicosociales y recuperar y promover los derechos de los niños, niñas y jóvenes.

Para la comunidad campesina de Simití es crucial que se garantice el funcionamiento de los puestos de salud de los cinco corregimientos, dotados no solo con equipos y medicamentos sino con personal; lo mismo para las escuelas y colegios, y que los jóvenes tengan acceso a becas para continuar con su formación profesional. Los habitantes exigen, además, un acto de perdón público, en el que los victimarios reconozcan el daño que provocaron a las familias, pero también a los niños, niñas, jóvenes y mujeres altamente vulnerados.

Otro punto clave será la actualización del Plan de Retornos, para que las 17 mil personas que fueron expulsadas del municipio cuenten con la certeza de que podrán volver a su tierra. Y para que eso suceda, sin duda, los campesinos consideran que debe haber un programa de vivienda rural, uno que recupere ambientalmente los ríos y ciénagas devastados y que cuenten con carreteras y servicios públicos que les permita hacer productivo el campo y recuperar su vocación campesina.

Para los campesinos es fundamental la formalización de la propiedad rural. No tienen títulos, pues los cinco corregimientos están sobre una Zona de Reserva Forestal protegida por la Ley 2 de 1959, de manera que necesitan que el Ministerio de Ambiente realice una sustracción para que las familias puedan seguir haciendo un uso especial del territorio. En Simití, los parceleros requieren garantizar la seguridad alimentaria, para lo cual solicitan apoyo en el desarrollo de las granjas integrales y dotación de un banco de maquinaria para mejorar las vías de comunicación.

Gil Alberto García, líder campesino de Monterrey, explica que concretar el proceso de reparación colectiva en Simití es una apuesta por la paz, precisamente porque al haber atención del Estado y oportunidades para desarrollar el campo se reducirá la pobreza, generadora de tanta violencia en el país. Su llamado se suma al de comunidades que han sobrevivido a la guerra en la treintena de municipios que integran la región del Magdalena Medio.

"La Unidad ha venido avanzando solo en algunos puntos, pero quieren trabajar más en lo simbólico. También quieren que retiremos algunas medidas. Lo otro es que quieren descargar el 90 por ciento del

>>> En 2012, el Comité Cívico del Sur de Bolívar le entregó un documento de reparación al Ministerio de Agricultura y a la Directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en el que advirtieron la necesidad de formalización en la propiedad para desarrollar proyectos productivos.
Foto: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

cumplimiento de esas medidas a la administración municipal, y sabemos que eso es difícil porque el presupuesto es ínfimo. Estuvimos socializando el plan con el gobierno local, pero no encontramos mucho interés", indica García.

VerdadAbierta.com conversó con Amparo Chicué, directora Territorial de la Unidad de Víctimas en el Magdalena Medio, quien reconoció que sí ha habido dificultades en la concreción del documento final del plan de reparación colectiva, pero aclaró que la Unidad ha trabajado el territorio desde que asumió el caso. Sobre lo primero, explicó que las medidas de desarrollo como las relacionadas con la educación, salud e infraestructura corresponden a las entidades territoriales y que la responsabilidad de la Unidad radica en hacer incidencia en éstas para que se comprometan y destinen los recursos para su cumplimiento.

"En aras de la verdad, es importante decir que la administración pasada de la Gobernación de Bolívar fue totalmente invisible; diferente a ésta (la actual), con la que ya hemos hecho varios acercamientos. Hemos hecho incidencia en la Alcaldía de Simití y en los ministerios; lo que sucede es que no ha habido las voluntades suficientes para sentarse. Y nos toca seguir haciendo el ejercicio para conciliar el plan", precisa Chicué.

Sin embargo, la funcionaria reitera que la Unidad está presente en el territorio realizando varias acciones: "Hace un año solo había un punto de atención en San Pablo; ahora hay uno en Simití y otro en Santa Rosa. En los cinco corregimientos estamos trabajando con 500 familias en los procesos de retorno. En San Blas y Monterrey destinamos 170 millones de pesos solo en materiales para la fabricación de dos placa-huella; dotamos de mobiliario y aulas a Monterrey y San Joaquín, con 75 y 85 millones de pesos, de forma respectiva; con el programa de Familias en su tierra del Departamento de la Prosperidad Social se invirtieron 900 millones en las familias retornadas; también se destinaron 20 millones para apoyar el Hogar Juvenil de Monterrey y 800 millones para un proyecto ganadero para Santa Rosa y Simití".

Chicué acepta que entre la comunidad campesina haya desesperanza al sentir que no se avanza en concretar un documento final, pero "ya el tema de la reparación colectiva está incluido en el Plan de Atención Territorial de la Gobernación, están en el Plan de Desarrollo de Simití. Vamos por el camino que es; esperamos que, en unos quince días, nos reunamos nuevamente con el Comité de Impulso".

» Tras soportar más de 30 años de guerra y 10 más que sean atendidos por el Estado, los campesinos de Simití tienen puesta ahora sus ilusiones en los acuerdos de desarrollo agrario integral y reparación de víctimas alcanzados en la negociación del gobierno nacional con la guerrilla de las Farc en La Habana. Con su implementación, esperan que sus solicitudes no se queden en la "gestión", reuniones, documentos o trámites y se atiendan de manera oportuna para sellar de una vez por todas las 'fracturas' de un conflicto armado que les arrebató la tranquilidad, la vida y el progreso.

En San Pablo, la esperanza está en los lápices

La experiencia educativa en el corregimiento Pozo Azul, en el sur de Bolívar, ha sido una propuesta de paz para hacerle resistencia al reclutamiento y la pobreza. Esta iniciativa pide a gritos recursos para mejorar la infraestructura y las condiciones de los maestros.

ESCRITO POR **IVÁN ANTONIO LIÉVANO* Y VERDADABIERTA.COM**

>>> El Centro Educativo Pozo Azul tiene su sede principal en el corregimiento de San Pablo, que lleva este mismo nombre. Desde el año 2006 allí se gesta un laboratorio de paz, pues cuenta con dos casas estudiantiles que albergan a niños que desean realizar sus estudios de bachillerato. *Foto: Iván Liévano.*

>>> La Defensoría del Pueblo encendió de nuevo las alarmas en San Pablo, sur de Bolívar. El Sistema de Alertas Tempranas documentó el reclutamiento de diez niños entre enero y marzo de este año y destacó que los asedios y amenazas contra menores son frecuentes en los corregimientos Virgencita, Cañabraval, Vallecito y Cerro Azul. La guerrilla los acecha para convertirlos en 'raspachines' en los cultivos de hoja de coca que hay en la región.

Para la Defensoría, una forma de hacerle frente a este tipo de situaciones, que involucra a los menores de edad, es fortalecer el sistema educativo. Esa fue precisamente la tarea titánica que emprendió hace una década un grupo de profesores dirigidos primero por la maestra Rosalba Álvarez y luego por Zoraida Álvarez, quienes pese a compartir el mismo apellido no son familiares.

Su propósito fue impulsar casas estudiantiles en el corregimiento Pozo Azul, que albergaran a jóvenes venidos de los lugares más remotos del municipio para continuar con el bachillerato. La idea surgió en 2004, justo cuando el conflicto armado dejó el mayor número de desplazados en el pueblo: ese año 2.200 personas salieron expulsadas; doce meses después, la cifra se duplicó.

El municipio de San Pablo ha sido escenario, desde hace varias décadas, de una guerra desatada por diferentes actores armados ilegales: en las décadas del ochenta y noventa tuvieron protagonismo

***Periodista comunitario de San Pablo, Bolívar**

las guerrillas del Eln y las Farc; a finales de los noventa, y hasta el 2006, emergió el Bloque Central Bolívar (Bcb) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc); desde su desmovilización y hasta este año, operan las llamadas 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' y reductos criminales que se hacen llamar 'Águilas Negras'.

El botín de guerra en esta región ha sido la hoja de coca y la explotación aurífera, negocios que se ven favorecidos por el río Magdalena, a través del cual se transportan hacia diversas regiones del país los alijos de cocaína y el oro, principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales.

San Pablo tiene por lo menos 31 mil habitantes y las condiciones de pobreza son altas. En 2011, de las 17 mil personas censadas como población económicamente activa, 4 mil estaban sin empleo. Buena parte de la población rural, se dedica al cultivo de plátano, caucho, cacao y palma de aceite, que se combina en algunas zonas con ganadería.

El problema es la mala infraestructura vial, que eleva los costos de comercialización en el casco urbano y municipios vecinos, lo que implica que los campesinos ni siquiera contemplen la posibilidad de sacar las frutas y verduras que cultivan en sus parcelas. Por tal razón, muchos de los alimentos que se consumen en el pueblo son traídos desde Bucaramanga en camiones que transitan por la carretera que conduce hacia Puerto Wilches; desde allí atraviesan el río en ferry hasta llegar al puerto de San Pablo.

El poco empleo que se consigue formalmente es en las distintas entidades del Estado, pero estos son reducidos. Todo ello ha generado altos niveles de trabajo informal, lo que explica por qué en las calles del casco urbano abunda el 'moto-taxismo'.

En este contexto, los jóvenes están expuestos a las 'ofertas' de las economías ilícitas. "Una modalidad de reclutamiento consiste en enrolar a los jóvenes del área rural como 'raspadores' de hoja de coca por un salario de 800 mil pesos o custodiando retroexcavadoras por cerca de 200 mil pesos semanales, que varían de acuerdo con la producción. Para ejercer dicho oficio portan armas cortas...", indica un informe de riesgo emitido por la Defensoría el 22 de junio de 2012 para los municipios de San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití; y añade que las niñas no solo usadas para transportar oro y droga, sino que obligándolas a prostituirse.

Quienes conocen la realidad de los negocios ilícitos en la región aseguran que el pago por 'trabajar' en las 'cocinas', donde se cristaliza la pasta de coca y se extrae el clorhidrato de cocaína, o en las minas de oro puede ascender a los 2 millones de pesos, según la tarea que encarguen.

» "Una modalidad de reclutamiento consiste en enrolar a los jóvenes del área rural como 'raspadores' de hoja de coca por un salario de 800 mil pesos o custodiando retroexcavadoras por cerca de 200 mil pesos semanales, que varían de acuerdo con la producción. Para ejercer dicho oficio portan armas cortas..."

En medio del desasosiego económico que genera la falta de oportunidades laborales lícitas, el Centro Educativo Pozo Azul ha sido una 'luz' para aquellos que escasamente logran terminar los estudios primarios en las veredas y corregimientos.

Profesores y estudiantes que participaron de este "hogar de sueños", como lo bautizaron los jóvenes, dan cuenta de los retos que tiene por delante el gobierno nacional para implementar los acuerdos firmados con la guerrilla de las Farc en La Habana, en especial aquellos que se relacionan con las medidas de reparación a las víctimas del conflicto armado, una de las cuales podría ser el impulso del Centro Educativo Pozo Azul.

Un hogar para estudiar

Francisco Cárdenas es el ejemplo para toda la vereda Cañabraval. Es el único de su familia que ha logrado acceder a la educación superior a pulso, con el convencimiento de que su historia será distinta a la de muchos niños de su pueblo.

Quien le sembró esa semilla de entusiasmo a Francisco fue el profesor Rafael Castro Padilla, maestro de ciencias naturales y química del Centro

>>> En cincuenta años de guerra, muchos niños del campo vieron a hombres que cargaban fusiles. En el Centro Educativo Pozo Azul su referente, por ejemplo, era este maestro que les enseñaba el saxofón y la música representativa de cada región del país.
Foto: Iván Liévano.

Educativo Pozo Azul y uno de los tres coordinadores de las casas estudiantiles de la época. "Para mí fue como mi padre. Me orientó y me motivó a seguir adelante", dice el joven, sonriendo.

El Centro Educativo Pozo Azul tiene su sede principal en el corregimiento que lleva este mismo nombre y está conectado a otras 26 sedes veredales donde solo se imparte educación primaria. Para 2003, cuando Francisco terminó el quinto grado, sus padres no tenían los medios económicos para enviarlo hasta el corregimiento y mucho menos al casco urbano de San Pablo para que adelantara sus estudios de bachillerato.

"Pero mis papás se enteraron que había un proyecto de unas casas estudiantiles, que los niños y jóvenes podíamos vivir en Pozo Azul y estudiar. Con 15 años me fui a estudiar el bachillerato", recuerda Francisco.

Zoraida Álvarez cuenta que la iniciativa fue impulsada por la entonces rectora Rosalba Álvarez, quien tocó las puertas de la Alcaldía para conseguir recursos. La idea era que el Municipio comprara dos casas en el corregimiento y las adecuara como hogares permanentes para que niños como Francisco pudieran vivir allí para asistir con puntualidad a la secundaria.

"En 2006 iniciamos con unos 45 ó 50 estudiantes. Al principio no fue fácil porque la Alcaldía solo compró las casas y los niños dormían en colchonetas. Pero seguimos trabajando por un proyecto educativo y social, para que los jóvenes cumplieran sus sueños", evoca Álvarez.

A comienzos de 2008, Francisco llegó a la sede con una hamaca cargada al hombro. Como lo cuenta Zoraida, la infraestructura de las casas estudiantiles era aún incipiente: los niños dormían apiñados porque sólo había 10 camarotes; y los estudiantes sumaban más de 60.

"Algunos llevábamos hamaca y otros dormíamos en colchonetas", apunta Francisco, quien aún recuerda ese primer día: "Le confieso que sentí miedo cuando llegué a Pozo Azul. Estaban las marcas de la guerra en las viviendas, muchas estaban solas; pero luego me di cuenta que era otro mundo, era muy tranquilo".

Con el apoyo del Servicio Jesuita a Refugiados, la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) las dos casas estudiantiles fueron dotadas con camas y enseres para la alimentación y el aseo. Una casa albergaba 60 niños; la otra a 40 niñas. Francisco recuerda que la casa estudiantil de niños era supervisada por tres coordinadores: Rafael Castro Padilla, su mentor; Ivamer Ariza, maestro de inglés; y Albis Balsa, docente de literatura y teatro.

"Las casas estudiantiles han sido muy importantes para la formación de muchos niños y niñas cuyas familias no tienen los recursos para garantizarles el estudio de bachillerato. Es quizá la oportunidad más grande de sus vidas en medio de una región marcada por el conflicto. Es satisfactorio saber que varios de los niños que orientamos salieron adelante", indica Castro Padilla refiriéndose como ejemplo a su pupilo Francisco.

Edson Zambrano, profesor de educación física, recuerda cómo Pozo Azul se hizo a profesionales apasionados por la docencia. Una vez salió la convocatoria para el sector público, presentó pruebas y obtuvo una alta calificación. Listos los resultados, él y varios de sus colegas llegaron a Cartagena para saber en qué rincones de Bolívar había plazas disponibles para el nombramiento y "cuando dijeron San Pablo, nadie quería. Yo los convencí".

» "Algunos llevábamos hamaca y otros dormíamos en colchonetas", apunta Francisco, quien aún recuerda ese primer día: "Le confieso que sentí miedo cuando llegué a Pozo Azul. Estaban las marcas de la guerra en las viviendas, muchas estaban solas; pero luego me di cuenta que era otro mundo, era muy tranquilo"

Su principal argumento fue que municipios como éste, azotados por el conflicto, necesitaban de la mejor herramienta: la educación.

Poco a poco el Centro Educativo Pozo Azul sumó 12 maestros titulares especializados en diferentes disciplinas. Los estudiantes no solo recibían el ciclo básico, sino también clases de música, emprendimiento, teatro y deportes. Zambrano cuenta que, por ejemplo, el colegio llegó a consolidar un grupo de flautas y tamboras.

Asimismo, el profesor Luis Ávila les enseñó cómo tener una idea propia de negocio y administrar muy bien los recursos; con el maestro Alvis nació un grupo en artes escénicas que era la sensación con sus presentaciones, y a su cargo, la selección de fútbol participó en varios campeonatos. "Esto llevó a que los jóvenes concentran su tiempo en estudiar o recrearse; alejándolos de la guerra o del trabajo a temprana edad", apunta el docente.

Francisco dice que cuando sus padres lo enviaron a Pozo Azul su madre le insistió que ella quería que tuviera una vida distinta a la de los niños de San Pablo. "Mi mamá fue mi motor para salir adelante", afirma.

> "Nos levantámos, dejábamos listas las camas, nos bañábamos y por grupos ayudábamos con el aseo de la casa y la preparación de los alimentos. Estudiábamos hasta la una de la tarde, hacíamos tareas y después teníamos tiempo para recrearnos"

Durante cinco años, este joven recibió una educación en la que le inculcaron la responsabilidad y el trabajo en equipo. "Nos levantámos, dejábamos listas las camas, nos bañábamos y por grupos ayudábamos con el aseo de la casa y la preparación de los alimentos. Estudiábamos hasta la una de la tarde, hacíamos tareas y después teníamos tiempo para recrearnos", comenta. La sede principal del colegio alcanzó a tener en sus aulas por lo menos 200 niños entre primaria y bachillerato, una cifra satisfactoria.

En 2012, Francisco recibió el título de bachiller, "pero quedé desubicado. No sabía qué hacer". El impulso que le imprimió su madre, y luego el profesor Rafael Castro Padilla, lo condujeron a probar suerte en Bucaramanga, la capital santandereana donde vivía una tía.

Su relato está cargado de emoción cuando explica cómo fue sorteando los obstáculos: deambuló por las calles "no porque hubiera caído en algún vicio sino porque no me hallaba; no encontraba qué hacer; entré como en depresión. Además me robaron el computador que era lo único que tenía y que había comprado con mucho esfuerzo".

Por referencia de un primo, trabajó en una fábrica de estanterías, pero no fue una buena experiencia: se cortó muchas veces las manos y sentía que la pintura le quemaba la cara. Un día fue a parar a la plaza de mercado de San Francisco, donde se ofreció como cotero, descargando en menos de una hora un camión lleno de panela. "Me pagaron 30 mil y entonces me quedé para trabajar en el descargue. Un día un señor me llevó hasta la Central de Abastos y ahí sí supe qué era ver un mercado. Me comencé a ganar la confianza de la gente para cargar bultos o recoger basura, lo que saliera. Recorrí toda la ciudad repartiendo alimentos y útiles de aseo", cuenta.

Decidido a mejorar su condición, un día fue a la sede de la carrera 27 del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y se presentó como aspirante a la Tecnología en Contabilidad y Finanzas. "Se presentaron 500 personas y seleccionaban a 35; yo salí seleccionado". Su ingreso a esta institución le significó duras jornadas: trabajaba al amanecer, entre las 1:30 y las 6:30 en la Central de Abastos, y a las 8 de la mañana debía asistir a clases. Mantuvo ese ritmo de trabajo y estudio por varios meses hasta que su situación mejoró por un subsidio de alimentación que le otorgó el Estado y un patrocinio que recibió de una empresa a través del Sena.

Su experiencia en el trabajo formal llegó con las prácticas empresariales. En la Fundación Médico Preventiva le dieron la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante sus dos años de formación como tecnólogo y a pulso logró un empleo en el área de facturación. "A mí me gustan mucho las tecnologías, me encanta la programación y el uso de base de datos. Eso le ha servido mucho a la empresa", dice.

Ya con las garantías de un empleo, Francisco comenzó a ahorrar y ahora busca obtener un título de Contador en las Unidades Tecnológicas. Paralelo a los porcentajes, impuestos y números, este joven de 24 años es un apasionado por los computadores y las aplicaciones móviles. "En este momento estoy

> **"...**Lo que sí anhelo es volver algún día con recursos para ayudar a sacar adelante las casas estudiantiles. Yo tengo una vida distinta gracias a que pude estudiar**"**

lanzando una aplicación que será muy útil. Ya tendrán noticias", afirma con una sonrisa después de una larga jornada de trabajo.

"Necesitamos recursos"

Pese al ejemplo de Francisco, la situación comenzó a cambiar en el Centro Educativo Pozo Azul, los maestros comenzaron a ser trasladados y en 2012, en aplicación del Decreto 2355 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional, el Centro Educativo Pozo Azul fue entregado en concesión primero a una organización no gubernamental y luego a la Diócesis de Magangué.

Antes, gran parte de los recursos provenían del Ministerio, de la Alcaldía y de la cooperación internacional; ahora depende de la asignación que fije el Ministerio y el suministro de alimentos que entrega el Municipio.

Según Rafael Herrera, secretario de Educación de San Pablo, la Diócesis trabaja con "las uñas" y el padre Leonel Coma Drago le ha impreso todo el esfuerzo para sostener el proceso educativo de unos 100 jóvenes que sueñan con terminar sus estudios de bachillerato.

"Como administración municipal garantizamos el suministro de alimentos para las casas estudiantiles, pero la dotación y el mejoramiento de la infraestructura es responsabilidad del gobierno nacional. Las casas están en mal estado. Con la Unidad Nacional de Víctimas propusimos un proyecto para lograr recursos que permitan mejorar las condiciones y el funcionamiento de las casas", asegura el Secretario.

El Plan de Desarrollo del Municipio "Unidos por San Pablo" (2016-2019) reconoce que "el sector educativo está en crisis" y admite las dificultades de funcionamiento de los centros educativos de Pozo Azul y Canaletal debido al deterioro de sus instalaciones físicas y a la falta de docentes, situación que de alguna forma ha incidido en la deserción escolar.

Varios profesores de San Pablo explican que en la actualidad no hay suficientes recursos para contratar maestros con especialidad y los que estaban fueron trasladados. El Secretario de Educación asegura que es necesario que el gobierno nacional ponga los ojos en municipios como éste, donde los jóvenes son vulnerables en medio de la persistencia del conflicto.

>>> En cincuenta años de guerra, muchos niños del campo vieron a hombres que cargaban fusiles. En el Centro Educativo Pozo Azul su referente, por ejemplo, era este maestro que les enseñaba el saxofón y la música representativa de cada región del país. *Foto: Iván Liévano.*

"La Diócesis está haciendo un excelente trabajo, el padre Leonel Coma es un hombre muy preocupado por la recuperación del tejido social. La institución cuenta con un psicólogo y están haciendo el mejor esfuerzo para que los niños de zonas veredales sigan estudiando", explica el funcionario.

Pero los que impulsaron las casas estudiantiles entre 2006-2012 hablan con nostalgia de aquellos años y quisieran que el Centro Educativo de Pozo Azul reciba el apoyo suficiente para que se fortalezca como un laboratorio de paz territorial, que cuente con una suficiente planta de maestros, que la infraestructura sea la idónea y que se gestionen proyectos para que los jóvenes continúen con un proyecto de vida.

Ahora que Francisco será profesional y que es inspiración para su familia, pero también para la generación de niños de la vereda Cañabraval, espera pronto retribuirle su formación al Centro Educativo Pozo Azul. "Yo vivo en una ciudad, pero no sueño con traerme a mis papás ni comprarles un lujoso apartamento. Ellos son campesinos y traerlos acá sería como meterlos en una jaula; los mataría de pena moral. Lo que sí anhelo es volver algún día con recursos para ayudar a sacar adelante las casas estudiantiles. Yo tengo una vida distinta gracias a que pude estudiar", asegura el joven.

Francisco reconoce que fue el impulso de sus maestros, pero también la fuerza propia, la que lo llevaron a donde está. Dice con angustia que sabe que muchos de sus compañeros están vivos, que por fortuna no se los llevó la guerra, pero que tratan de sobrevivir en el campo, incluso sin tierra, por la escasez de oportunidades en el municipio. Para él y para los maestros que han visto contados ejemplos de superación en San Pablo, la paz está en los lápices.

Morales y Arenal:
la larga espera para impulsar el campo

Aunque en 1999 el antiguo Incora aprobó en estos municipios una Zona de Reserva Campesina, son escasos los esfuerzos del Estado por impulsar proyectos que permitan superar las condiciones de pobreza. Para la comunidad, esta es la clave de la paz.

ESCRITO POR **DEIMER CAMPUZANO* Y VERDADABIERTA.COM**

>>>En el campo necesitan tantas oportunidades como los granos de arroz de una cosecha. Ese es llamado de los campesinos de Morales y Arenal, dos municipios bañados por el río Magdalena, en el sur de Bolívar, que tienen una Zona de Reserva Campesina (ZRC), pero en el papel. Hace 17 años el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) les entregó un título por 29 mil 110 hectáreas; no obstante, los proyectos y recursos para impulsar la economía local han sido escasos y fragmentados.

En esto coinciden Cecilia Rodríguez, Carlos Eduardo Pérez y Zeneth Mójica, líderes de las asociaciones que dieron impulso a la constitución de la ZRC. Ellos esperan que el gobierno nacional concentre su atención en estos municipios que están lejos del radar de las noticias nacionales. Los habitantes de Morales y Arenal han sido testigos de las secuelas y de la persistencia del conflicto.

> "En el campo necesitan tantas oportunidades como los granos de arroz de una cosecha. Ese es llamado de los campesinos de Morales y Arenal, dos municipios bañados por el río Magdalena, en el sur de Bolívar, que tienen una Zona de Reserva Campesina (ZRC), pero en el papel."

Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV), durante los últimos 30 años el conflicto armado desplazó a 14 mil 307 personas de Morales y a 7 mil 196 de Arenal. Ambos municipios son vecinos de la Serranía de San Lucas, una cadena de montañas que actores armados ilegales utilizan como escondite y 'cocina' para el procesamiento de cocaína.

La zona ha sido disputada desde los setenta por la guerrilla del Eln; en los noventa por el Ejército Revolucionario Popular (Erp); y a finales de esa década y hasta 2006 por grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. En los últimos 10 años la violencia ha continuado por cuenta del Eln y de las llamadas 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia'.

Desde que la ZRC fue creada, los campesinos esperaban contar de forma constante con subsidios o proyectos productivos que les permitieran superar las condiciones de pobreza y progresar. Aunque ésta fue la tercera Zona creada en el país, los líderes de la comunidad consideran que urge su aplicación de cara a los Acuerdos de Paz de La Habana. El 26 de mayo de 2013, los negociadores del gobierno y las Farc anunciaron precisamente los logros sobre el primero de los seis puntos de la negociación, titulado Reforma Rural Integral.

En este punto, las partes consideran que para garantizar la llamada "paz territorial", el Estado debe garantizar el acceso y uso de la tierra, formalizando la propiedad rural a comunidades que históricamente las han solicitado o que carecen de ella. Para concretar ese propósito, tanto gobierno como insurgencia estimaron que es clave la protección de las Zonas de Reserva Campesina y el desarrollo de un Fondo de Tierra para la Paz.

Ahora que recién se ha liquidado el Incoder, la comunidad sólo espera que la nueva Agencia Nacional de Tierras asuma la reactivación no solo de

*Periodista comunitario de Morales, Bolívar

>>> La Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal es una de las seis únicas figuras agrarias de este tipo creadas en el país y la primera de la región del Magdalena Medio.
Foto: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

la Zona creada para Morales y Arenal, sino de las otras cinco que ya existen - Calamar (Guaviare), Cabrera (Cundinamarca), El Pato (Caquetá), el Valle del Río Cimitarra (Antioquia y Bolívar) y en el alto Cuembí y Comandante (Putumayo)-, sino las que podrían constituirse en el futuro. Hasta junio de 2015, el recién liquidado Incoder tenía en su base de datos tres ZRC en estudio de viabilidad, seis solicitudes más en diversos estados administrativos y otras 15 sin que haya siquiera comenzado su estudio.

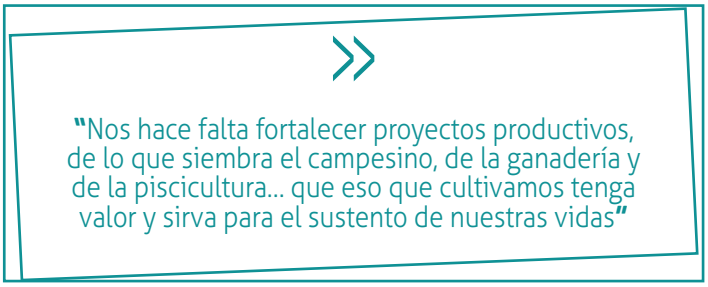
Pedaleando proyectos

Las ZRC fueron creadas por la Ley 160 de 1994 con el fin de "fomentar y estabilizar la economía campesina y superar las causas de los conflictos que las afectan". Sin embargo, esta figura agraria ha sido altamente estigmatizada. En julio de 2013, durante el Encuentro de Dirigentes del Suroeste de Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que estas Zonas "son emporios del terrorismo". Su discurso no fue distinto al de sus ocho años de gobierno, cuando intentó fracturar la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.

A los campesinos de Morales y Arenal les ha tocado 'remar' contra ese estigma, buscando respaldo de las instituciones agrarias y organizaciones no gubernamentales. Cecilia Rodríguez cuenta que la constitución de la Zona fue impulsada por Asoreserva, que logró el título del Incoder tras "marchas y éxodos campesinos" cuando la violencia alcanzaba las cifras más altas en la región. El título indica que las 29 mil hectáreas que componen esta ZRC fueron sustraídas de un Área de Reserva Forestal que ya estaba siendo explotada por campesinos y que debía destinarse precisamente para el cultivo de alimentos. Para ese entonces se proyectó beneficiar a unas 3 mil 500 familias.

Después de Asoreserva, el proceso lo asumieron las organizaciones campesinas Asohonda y Coomoarenal. Rodríguez relata que fue en 1999 que recibieron el primer impulso cuando la Unión Europea financió un Laboratorio de Paz para fortalecer el movimiento campesino. La apuesta de la comunidad fue mejorar los sembradíos de arroz, el principal alimento que se cosecha en la zona dada la riqueza hídrica del Magdalena y los complejos cenagosos.

Según Rodríguez, durante la siguiente década recibieron apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, de la Alcaldía de Morales y del entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para ejecutar un proyecto de distrito de riego con el fin de mantener la producción de los cultivos.



>>> El conflicto armado de las últimas tres décadas desplazó a 21 mil habitantes de los municipios de Morales y Arenal, en Bolívar.
Foto: Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Carlos Eduardo Peña, otro líder que conoce el proceso de constitución de la ZRC, cuenta que el distrito fue instalado entre 2008 y 2009, y comenzó a funcionar en 2010. Desde entonces, entre unas 150 y 200 hectáreas de la vereda Arcadia están sembradas con arroz y cuentan con la infraestructura para tener un sembradío permanente.

"El distrito está operando bien. Gracias a Dios no ha tenido un daño. Solamente que por época de verano los cultivos se tienden a atrasar. Pero con la infraestructura que hay se puede seguir sembrado arroz o cualquier otro alimento", explica Peña.

Producir más alimentos hace parte de la necesidad de esta comunidad que propuso hace dos años el funcionamiento de un molino y una despulpadora de frutas y hortalizas. Peña explica que recibieron asesoría del recién liquidado Incoder y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sin embargo, la iniciativa quedó en veremos porque, según el líder, se requiere de una alta inversión para hacerlo posible.

Otra de las necesidades de la ZRC es la reactivación de las actividades propias de la vida campesina. "Nos hace falta fortalecer proyectos productivos, de lo que siembra el campesino, de la ganadería y de la piscicultura... que eso que cultivamos tenga valor y sirva para el sustento de nuestras vidas", indica Peña, quien considera que urge el funcionamiento de un molino de gran capacidad para poder comercializar las cosechas de arroz.

» Producir más alimentos hace parte de la necesidad de esta comunidad que propuso hace dos años el funcionamiento de un molino y una despulpadora de frutas y hortalizas.

Para Bernardo Manuel Rivero, líder también de la ZRC, el gobierno nacional debe concentrar su atención, además, en recuperar las ciénagas y humedales que de a poco han ido desapareciendo. Son los casos de las Ciénagas de Tirabuzón y Simoa, afectadas por varios fóraneos y colonos que han sedimentado los reservorios de la diversidad de fauna y flora de la zona. "Esas son áreas de protección de la Zona de Reserva y se están secando. Hemos denunciado lo que está pasando, pero nadie nos escucha", asegura.

Rivero expresa indignación al reconocer que intentaron presentar un proyecto para la producción de lácteos, pero su iniciativa se quedó en una propuesta. Quienes sí lograron sacar adelante una bufalera y una producción comercial de lácteos, pero con el apoyo de la cooperación internacional, fueron los campesinos de la Zona de Reserva del Valle del Río Cimitarra, que cobija a unas 25 mil familias de Yondó y Remedios, en Antioquia, y de Cantagallo y San Pablo, en Bolívar, pero su proceso es una muestra de cómo han tenido que luchar a pulso sus iniciativas.

Desde la política local, las voces para promover la ZRC son pocas. Por ahora la concejal Osmeida Manrique propone el diseño de un Proyecto Ecoturístico en Morales, que permita a nacionales y extranjeros conocer los complejos cenagosos, las cavernas de San Miguel y la Casa de Piedra.

Cecilia Rodríguez, Carlos Eduardo Peña y Bernardo Manuel Rivero creen que existe, además, una deuda con la formalización de la propiedad rural. En la ZRC de Morales y Arenal, los campesinos trabajan la tierra sin títulos de propiedad, llevan casi dos décadas pidiéndole, primero al Incora, y luego al Incoder, que fueran diligentes con la adjudicación, y en este momento están a la expectativa de que la nueva Agencia Nacional de Tierras (ANT) cumpla con la promesa agraria de la Ley 160 de 1994.

"Lo que he podido notar es que el Estado no ha invertido en estas zonas ni las ha cuidado. La Sociedad Colombiana de Geología ha realizado estudios en la zona y ha encontrado que tenemos un tesoro natural. Queremos que entre todos nos unamos y cuidemos esas riquezas", dice Manrique.

Sigue la guerra

Sin embargo, el sur de Bolívar requiere atención especial, dado que el conflicto persiste. El 16 de enero de este año fue noticia nacional el secuestro de por lo menos 15 pescadores y dos menores a manos del Eln.

Desde octubre de 2015, los combates han sido persistentes en el corregimiento de Mico Ahumado, mientras en la parte baja del municipio, en la cabecera de Morales, se han incrementado los casos de asesinatos y disputa territorial entre bandas paramilitares.

Cuando en marzo de 2016 el gobierno nacional anunció un proceso de paz con el Eln, grupo armado ilegal que tiene amplia influencia en la región, el optimismo volvió al territorio, donde esperan que los diálogos se concreten con acciones reales, como la del cese al fuego.

Los campesinos de Morales y Arenal aspiran a que termine esa larga espera de impulsar el campo y que su Zona de Reserva supere esa condición de estar únicamente en la lista de pendientes de la institucionalidad agraria.

» "Lo que he podido notar es que el Estado no ha invertido en estas zonas ni las ha cuidado. La Sociedad Colombiana de Geología ha realizado estudios en la zona y ha encontrado que tenemos un tesoro natural. Queremos que entre todos nos unamos y cuidemos esas riquezas"

» "Cuando en marzo de 2016 el gobierno nacional anunció un proceso de paz con el Eln, grupo armado ilegal que tiene amplia influencia en la región, el optimismo volvió al territorio, donde esperan que los diálogos se concreten con acciones concretas, como la del cese al fuego."

Cuando las oportunidades se 'esfuman' en el puerto petrolero

En Barrancabermeja, el reto de la paz territorial está en fortalecer la política pública para hacerle frente a las drogas ilícitas. El microtráfico es el generador de violencia en las comunas y fuente de financiación de las bandas criminales.

ESCRITO POR **CÉSAR SOLARTE* Y VERDADABIERTA.COM**

>>> Comienza el día. La prensa local registra en detalle el asesinato de un joven en algún barrio popular de Barrancabermeja, Santander. Así ocurrió el 5 de julio con Wilmer Velásquez Briceño, de 32 años, a quien las autoridades encontraron sin vida en una vivienda abandonada en el barrio La Paz, en la Comuna 3. Según la información que circuló en medios, la víctima "tenía antecedentes judiciales por el delito de porte, tráfico y control de estupefacientes" y la casa donde su cuerpo fue encontrado funcionaba un expendio de drogas. Meses atrás el lugar había sido allanado por dicha actividad ilegal.

Quince días atrás había ocurrido lo mismo con Jeison Guiza Tobón, de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa en la Comuna 5. Su crimen presuntamente estuvo relacionado con una "deuda por el consumo de estupefacientes". Su caso se suma a la lista de asesinatos y amenazas registradas desde de enero, evidenciando una relación entre violencia y drogas ilícitas. El 16 de enero Jonny Aurelio Martínez, de 19 años, fue acribillado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta por el barrio Nariño de la Comuna 6; su familia le dijo a la prensa que el joven consumía drogas y había recibido amenazas de muerte.

Diez días después en la Comuna 4, un sicario entró a una vivienda del barrio El Castillo y dejó herida a una pareja que, según las autoridades, estaba vinculada con el 'negocio de las drogas ilícitas'. Una de estas personas es Adalberto Beleño Pacheco alias 'Frika', capturado el 14 de febrero de 2016 en Bucaramanga, acusado de los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Las autoridades le dijeron a la prensa que el hombre, de 26 años, "era el líder de una banda delincuencial dedicada al microtráfico en Barrancabermeja".

Desde 2005 el Observatorio de Paz Integral (OPI), de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, emite un boletín mensual que registra los hechos de violencia ocurridos en esta región compuesta por una treintena de municipios de Antioquia, Bolívar, Cesar y Santander. Quien analice estos registros encontrará que desde esa fecha en Barrancabermeja son comunes los asesinatos asociados al "microtráfico", pero la prensa local y las autoridades las presentan como casos aislados sin develar el fondo de lo que ocurre en el puerto petrolero.

> **"**El año pasado hubo 66 homicidios, de jóvenes entre los 14 y 27 años, porque desertaron de la cadena del narcotráfico o porque tenían algún vínculo con esas estructuras**"**

Andrés Mauricio Ortiz, secretario general de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), explica que la situación obedece a una "descomposición social" como parte de las secuelas del paramilitarismo en la región y el rearme con las bandas criminales desde 2006. La organización no gubernamental asegura que gran parte de los desplazamientos urbanos corresponden a casos de jóvenes amenazados por bandas criminales. "El año pasado hubo 66 homicidios, de jóvenes entre los 14 y 27 años, porque desertaron de la cadena del narcotráfico o porque tenían algún vínculo con esas estructuras", indica Ortiz. La ong Credhos fue amenazada en julio de 2016, tras la circulación de un panfleto que se atribuyen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

***Periodista comunitario de Barrancabermeja.**
***Nombres cambiados por razones de seguridad.*

>>> En el puerto petrolero de Barrancabermeja, el conflicto armado tiene expresión en la ciudad, donde hay presencia de bandas criminales que se disputan el control del 'negocio' del microtráfico. *Foto: Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.*

Con el reciente anuncio de la firma del Acuerdo Final del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, en Barrancabermeja urge la aplicación del cuarto punto del acuerdo, el de Solución al problema de drogas ilícitas. Las partes acordaron que el primer pilar para lograrlo es "transformar las condiciones de los territorios que han sido afectados por la presencia de los cultivos ilícitos y generar condiciones de bienestar para las comunidades que allí habitan".

El segundo pilar será una apuesta por "abordar el problema con un enfoque de salud pública", creando un Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo", y el tercero, combatir al narcotráfico, realizando "una nueva estrategia de política que fortalezca y articule instancias, mecanismos y capacidades de investigación y judicialización a nivel nacional y regional... concentrándose en los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico...".

Pero en el puerto petrolero estos tres pilares serán un reto. Un consumidor y una exvendedora de drogas, que ahora purga una pena, cuentan cómo el 'negocio' ha proliferado en la capital petrolera sin que sean visibles aún las iniciativas o decisiones para erradicar el problema de raíz.

Pobreza, 'el caldo de cultivo'

Barrancabermeja tiene unos 190 mil habitantes según el censo oficial y está compuesta por 154 barrios, distribuidos en 7 comunas; 53 veredas y por lo menos unos 15 asentamientos aún por legalizar. El Plan de Desarrollo 2016-2019 del alcalde Darío Echeverri reconoce que la pobreza del municipio es alta, basándose aún en el censo de 2005 que aplicó una encuesta en 166 mil 405 habitantes del área urbana y en 17 mil 916 del área rural, encontrando que había condiciones de vulnerabilidad en 65 mil casos en la ciudad y en 14 mil en el campo.

El mismo documento advierte que esta situación se deriva, en gran parte, de dos de los elementos con más alto porcentaje en la medición del índice de pobreza multidimensional: en 88 por ciento el empleo informal y en 63 por ciento el bajo logro educativo. En el puerto, que debería registrar calidad de vida tras el funcionamiento histórico de la primera refinería del país, pululan por el contrario las ventas callejeras y el 'mototaxismo'.

Estas condiciones son aprovechadas por el narcotráfico. Barrancabermeja conecta por el río Magdalena con el sur de Bolívar, donde según el más reciente informe *Monitoreo de cultivos de coca*, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aumentaron las hectáreas de 925 (en 2013) a 1.565 (en 2014). "El incremento se asocia con un aumento en 28 por ciento del tamaño de los lotes principalmente con la aparición de núcleos fuertes en San Pablo, Cantagallo y Santa Rosa del Sur. Es importante llamar la atención sobre la reaparición de lotes de coca al norte de la Serranía de San Lucas", indica el informe.

En esto coincide el *Atlas de caracterización regional de la poblemática asociada a las drogas ilícitas en Santander,* del Observatorio de Drogas de Colombia, que indica que "la base de cocaína, el bazuco y la cocaína que ingresan al departamento para el microtráfico y el narcomenudeo provienen principalmente de la región sur de Bolívar...", aclarando que el departamento no es productor de marihuana, y que los traficantes se surten "con la

>>> El punto cuarto del Acuerdo Final del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, el de solución al problema de drogas ilícitas, propone el desarrollo de una política pública que atienda de forma integral a quienes sufren de adicción. *Foto: archivo Semana.*

producción del Cauca y el Cesar principalmente; en este último caso, se detectó que la droga viaja desde Aguachica e ingresa por los municipios de El Playón y Rionegro...".

Como quedó documentado en la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá contra Rodrigo Pérez Alzate alias 'Julián Bolívar', el Bloque Central Bolívar de las Auc entró al Magdalena Medio finalizando los años 90 con el pretexto de combatir a la guerrilla pero con la intención de fondo de quedarse con las rutas y rentas del 'narcotráfico'. En el sur de Bolívar, este grupo paramilitar instaló su 'base de operaciones' desde donde ordenaron desplazamientos y masacres en el territorio. Tras su desmovilización en 2006, la guerra no cesó; se recicló en cabeza de las llamadas bandas criminales.

Desde 2007 la Defensoría del Pueblo prendió las alarmas con el informe de riesgo número 008, que documentó cómo el conflicto se agudizó en la zona urbana por cuenta de la aparición de las 'Águilas Negras' y los 'Rastrojos', y los 'Urabeños', que entraron en una "disputa territorial". Los dos primeros en la Comunas 1, 4 y 5; mientras los segundos en las Comunas 3, 6 y 7, buscando ganar el pulso en el control de la comercialización de las drogas ilícitas. Para el mismo año apareció otro grupo llamado los 'Botalones', disputándose también dichas rentas.

> "En Barranca ahora es normal ver por ahí a la gente consumiendo... hay fronteras invisibles [control territorial] y mucha competencia... antes se conseguía un paco de 3.5 gramos de marihuana en 10 mil pesos; ahora por esa plata se consiguen hasta ocho gramos, y cada quien pasa y ofrece más barato"

En los boletines mensuales del Observatorio Integral de Paz está registrado cómo de forma recurrente estas bandas criminales se atribuyen la distribución de panfletos en los barrios más vulnerables, amenazando con asesinar a quien consuma drogas. Si se analizan los informes de Naciones Unidas y del Gobierno, pareciera una contradicción en su discurso pero no es así. El Ministerio Público encontró que dichas amenazas hacen parte de su estrategia en el control del 'negocio'.

"El microtráfico es una de las actividades ilegales que le genera recursos a esos grupos ilegales, sobre todo por el expendio de cocaína y los subproductos que de ella se derivan. La represión contra sectores juveniles a manera de la mal llamada "limpieza social" no es tanto para evitar que consuman drogas, como se pretende mostrar en los panfletos amenazantes, sino porque los denominados "parches" no están siendo controlados por los grupos armados ilegales y no están consumiendo las drogas que ellos distribuyen", indica el Ministerio en el informe de riesgo.

Esta situación ha sido constante desde el rearme tras la desmovilización paramilitar. El Informe de coyuntura regional *¿cómo vamos?*, de junio de 2016 del Observatorio de Paz Integral, indica que en ese mes ocurrieron cinco muertes violentas y cinco intentos de homicidio. "... el motivo de estos homicidios estaría ligado al negocio de las rentas ilegales. Las edades de las víctimas de homicidio oscilaron entre 25 y 35, años. Las edades de las víctimas de intento de homicidio oscilaron entre 18 y 28 años. El homicidio por encargo en Barrancabermeja sigue afectando principalmente a los jóvenes", señala el documento.

Para Credhos, el paramilitarismo atizó la 'narcotización' en Barrancabermeja, usando a los jóvenes en condiciones de pobreza como transportadores y expendedores. "Promovieron una cultura mafiosa y crearon las figuras de pequeños capos", quienes controlan 'ollas' que entre semana pueden generar 'ganancias' entre los dos y cinco millones de pesos y hasta ocho, los fines de semana.

"En Barranca ahora es normal ver por ahí a la gente consumiendo... hay fronteras invisibles [control territorial] y mucha competencia... antes se conseguía un paco de 3.5 gramos de marihuana en 10 mil pesos; ahora por esa plata se consiguen hasta ocho gramos, y cada quien pasa y ofrece más barato", dice Leonardo**, un joven consumidor de quien se reserva su nombre por razones de seguridad.

"Se mueve mucha plata"

Paola**, cuyo nombre real se omite para proteger su vida, está en la cárcel. Cayó en una redada de la policía acusada de traficar drogas. Ella la transportaba. Antes de entrar en ese 'mundo', trabajaba en restaurante de comidas rápidas. "La situación estaba difícil", comenta, reconociendo que se dejó seducir por la oferta de una banda: cuando si mucho en su trabajo alcanzaba a sumar un salario mínimo mensual vigente; en quince días reunía lo de un mes. Treinta días llevando droga de un punto a otro en la ciudad podía significarle casi 2 millones de pesos.

Era una principiante, "a los dos meses me atraparon. Me cogieron con 17 kilos de marihuana... uno no piensa que va a caer preso, que eso solo cogen a los duros", comenta. Según relata, realizaba 'los encargos' en las noches a veces en carros particulares y otras en transporte público, "para no levantar sospecha", confesando que en la cadena de negocio contaban con la complicidad de algunos miembros de las autoridades. "Toca tenerlos en la mano para que eso funcione", afirma.

Ahora en la cárcel asegura que por más difícil que sea encontrar trabajo formal, se empeñará en estudiar para sacar adelante a su pequeña, quien quedó bajo cuidado de la abuela. "Uno termina en esto por falta de oportunidades, por la pobreza que hay en las comunas y porque esos grupos se aprovechan de la necesidad", comenta la joven.

Leonardo es consumidor desde los 17 y asegura que espera algún día superar la adicción, pero lo que pasa es que "la sensación es una chimba", dice refiriéndose a los efectos de la droga. El joven cuenta que comprar marihuana, bazuco y perico en las comunas o en cualquier calle es fácil, pues el negocio ya está organizado, "a eso se dedican exparamilitares que no saben hacer más nada". Sobre el ejercicio de la autoridad, dice "que hay una doble moral", pues algunos de ellos "persiguen [el delito] pero también son consumidores".

Para Leonardo, el consumo se ha trasladado desde las 'ollas' y puntos marginales hacia las comunas, los colegios y las fiestas. "En las party, las fiestas electrónicas, hay ahora mucha droga sintética... ahí distribuyen y se consume todo lo que pueda metérsele a la neurona, como *tussy*, un perico de colores que lo pone a uno ver luces, lo deja quieto y le relaja el cuerpo... también pepas, papeles y ácidos...", apunta.

En Colombia, aún no hay estudios locales que permitan dimensionar el problema de las drogas sintéticas que difícilmente pueden monitorearse, pues a diferencia de las drogas tradicionales como la marihuana y la cocaína; éstas no tienen como insumo base un cultivo sino componentes que se procesan en laboratorios.

De momento, la solución está propuesta en el Acuerdo Final y en el Plan de Desarrollo Municipal. En este último documento, el municipio promete que aplicará la Ley 1622 de 2013, conocida como Estatuto de Ciudadanía Juvenil, creando un programa para jóvenes con problemas de drogadicción y construyendo un centro de rehabilitación de manejo integral. Esto porque la Alcaldía reconoce que los jóvenes están expuestos al reclutamiento de las bandas criminales, al trabajo forzado, la explotación sexual, el consumo de alcohol y la delincuencia. El municipio acepta en el Plan además que ni siquiera cuenta con un Centro del Menor Infractor y que estos casos terminan siendo remitidos a Bucaramanga.

"Para solucionar el problema de drogas ilícitas hay que desvertebrar el paramilitarismo con política pública", concluye Credhos. De no hacerlo así, los jóvenes barranqueños seguirán 'esfumando' sus oportunidades en un municipio que ha vivido históricamente del petróleo, pero cuyas condiciones de vida siguen siendo aún muy limitadas.

>>> El Plan de Desarrollo 2016-2019 de Barrancabermeja reconoce la necesidad de tratar a los jóvenes con problemas de drogadicción, construyendo un centro de rehabilitación de manejo integral. *Foto: archivo Semana.*

» "En las party, las fiestas electrónicas, hay ahora mucha droga sintética... ahí distribuyen y se consume todo lo que pueda metérsele a la neurona, como *tussy*, un perico de colores que lo pone a uno ver luces, lo deja quieto y le relaja el cuerpo... también pepas, papeles y ácidos..."

VERDADABIERTA.COM

FIP
FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

cooperación
alemana
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implementado por
giz